

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 21º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-22628-2014  
CARATULADO : MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DEFONDOS  
DE INVERSION / ALCALDE

Santiago, once de Diciembre de dos mil diecisiete

**VISTOS:**

A fojas 11, comparece don Antonio Gil Nievas, Gerente General y don Carlos Frías Tapia, Fiscal, ambos en representación de **MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**, sociedad del

giro de su denominación, en su calidad de administradora y representante de los fondos **Pionero Fondo de Inversión, Moneda Chile FUND LTD, Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión, Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión y Champion Fondo de Inversión Privado**, todos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea 3621, piso 8º, comuna de Las Condes, y deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de: 1) **PABLO SERGIO ALCALDE SAAVEDRA**, ingeniero comercial, domiciliado en calle El Roquerío N° 2415, comuna de Lo Barnechea; 2) **JULIÁN MORENO DE PABLO**, ingeniero comercial, domiciliado en calle Padre Hartes N° 100, Departamento N° 34, comuna y ciudad de Puerto Montt; 3) **MARÍA ISABEL FARAH SILVA**, ingeniera comercial, domiciliada en calle Sotto II Monte N° 1839, comuna de Vitacura; 4) **NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN**, ingeniero comercial, domiciliado en calle Camino La Golondrina N° 5134, comuna de Lo Barnechea; 5) **PABLO JORGE FUENZALIDA MAY**, ingeniero civil, domiciliado en calle María Monvel N°1078, casa F, comuna de La Reina; 6) **MARTÍN ANDRÉ GONZÁLEZ AKL**, ingeniero civil, domiciliado en calle Huérfanos 1055, oficina 803, comuna de Santiago; 7) **SANTIAGO ENRIQUE**



Foja: 1

**GRAGE DÍAZ**, ingeniero comercial, domiciliado en calle Amunategui N° 277, oficina 901, comuna de Santiago.

Como antecedentes generales expone que es de público conocimiento que en junio del 2011, Chile vivió uno de los mayores escándalos financieros denominado caso "La Polar", que quedó de manifiesto luego de que dicha empresa informara a la Superintendencia de Valores y Seguros, que se había detectado a su interior la ejecución de ciertas prácticas, consistentes en repactaciones unilaterales e incluso automáticas de cartera de clientes morosos, quedando ésta vigente, en vez de darle tratamiento de cartera morosa; situación que influyó en el régimen de provisiones y en los estados financieros de la compañía, ya que redujo, el volumen de provisiones o castigos que debían aplicarse a esas deudas y, los intereses registrados producto de esas renegociaciones se contabilizaban como ingresos, haciéndola aparecer con mayores ingresos de los que tenía. Estas utilidades artificiales repercutieron directamente en los ejecutivos principales de

La Polar, demandados en estos autos, quienes recibieron suculentos bonos por el resultado de la empresa, beneficiándose a título personal del más grande fraude financiero de los últimos tiempos. Los directores nunca advirtieron los hechos, pese a tener las herramientas para hacerlo, así como tampoco la auditora externa Price Waterhouse Coopers, y las sociedades clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch. Dicha situación se mantuvo por más de seis años. Lo anterior es de suma importancia, pues las personas que adquieren valores en el mercado, fundan sus decisiones en la información oficial que se les entrega, siendo un principio básico en la legislación sobre mercado de valores, que establece que la información que se vierte al mercado sea veraz, íntegra y oportuna, a fin de proteger, los valores asociados a la cautela de la fe pública y la transparencia del mercado. Es el caso que en base a una información oficial, a través de los fondos que administra, durante años decidió mantener sus inversiones por cuantiosas sumas de dinero en acciones de La Polar, inversiones que no se habrían sostenido el tiempo de haberse conocido la real situación de la compañía. Que consecuencia de lo anterior la Superintendencia de Valores y Seguros sancionó administrativamente a los ejecutivos por infracción a la Ley c



**Foja: 1**

Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas, así como también a la empresa auditora externa de La Polar Price Waterhouse Coopers (PWC), su socio Luis Alejandro Joignant Pacheco y las sociedades clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile, y las Nagas. Agrega que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, también sancionó a PWC por infracción a la Ley General de Bancos y a su normativa especial. Asimismo, Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Santiago Grage, fueron imputados y formalizados ante la justicia criminal, determinándose que la práctica de las renegociaciones unilaterales se inició en el año 2001. En un primer momento la "normalización" fue efectuada por un pequeño grupo de personas en el call center de La Polar, utilizando un listado con los rut de los clientes morosos, con la ausencia total de contacto con los clientes y sin mediar pago o abono alguno. En el año 2009, a instancias de la gerencia corporativa de asuntos financieros, las renegociaciones unilaterales se automatizaron, gracias al desarrollo de correos con los que se informaba a los clientes que debían ser sujetos de renegociación y sus condiciones, ya sea en cuanto a plazos, tasa de interés y/o a la aplicación de algún tipo de desfase. A través de las renegociaciones se llegó a alcanzar un número aproximado de 511.000 clientes. Se acreditó también que éstos fueron responsables de contribuir con sus actos en los hechos que relata, manteniendo y entregando por años información falsa al directorio de la compañía, al mercado y al público en general. En cuanto a la participación de los demandados en el escándalo financiero del caso La Polar, argumenta que dicha empresa estaba conformada por una gerencia general y seis gerencias corporativas. La gerencia corporativa de administración estaba encabezada por María Isabel Farah; la gerencia corporativa de productos financieros, por Julián Moreno; la gerencia corporativa de informática y logística liderada por Pablo Fuenzalida; la gerencia corporativa de finanzas por Santiago Grage; la gerencia corporativa comercial liderada sucesivamente por Nicolás Ramírez y Martín González; y la gerencia corporativa de negocios e internacional encabezada por

Meszaros. Entre el año 1999 a 2009, la gerencia general de La Polar ocupada por Pablo Alcalde, quien tras asumir el cargo de presidente

Da

RELRODS YMC



**Foja: 1**

directorio entregó su cargo a Nicolás Ramírez, renunciando éste último en enero del año 2011, asumiendo interinamente Martín González, que había ingresado a la compañía en junio del año 2010, como gerente corporativo comercial. En la práctica de las renegociaciones unilaterales efectuadas al interior de La Polar, participaba transversalmente personal adscrito a distintas gerencias, principalmente de productos financieros, administración e informática y logística, resultando evidente el desarrollo de una abierta comunicación sobre los procedimientos asociados a la cartera de clientes sujetos a este tipo de renegociaciones, según consta del procedimiento administrativo seguido por la SVS en contra de Pablo Alcalde, en el cual se acredita que tuvo conocimiento de la práctica de las renegociaciones unilaterales al menos desde marzo del año 2009 y, no obstante ello, en vez de requerir el cese inmediato de dicha práctica, la avaló participando con la señora Farah y el señor Moreno, actuar que extiende también al tiempo en que se desempeñó como presidente del directorio, reuniéndose frecuentemente con los gerentes corporativos María Isabel Farah y Julián Moreno. El señor Alcalde recibía información que le permitía tener un real y acabado conocimiento de la situación financiera al interior de la compañía, proporcionada por la gerencia de gestión, mediante informes de gestión (IDG), elaborados para ser distribuidos en la plana mayor de la sociedad, remitidos en base diaria, a lo menos desde el año 2008. En el citado informe se podía advertir los excesivos volúmenes de renegociaciones y refinanciamientos. Asimismo, mostraba la caída de la participación de las colocaciones por refinanciamiento en el total de las colocaciones por productos financieros, la que en el año 2009 fue renegociada en su totalidad, y en algunos casos, se efectuaron en más de una oportunidad. A partir del último trimestre de 2009, en el IDG Financiero se podían identificar separadamente las renegociaciones unilaterales automáticas, situación de la cual el señor Alcalde estaba en pleno conocimiento; además dicha fuente no era la única que le permitía mantenerse informado de la real situación financiera de la compañía, ya que el IDG de Recaudación era otro informe al que tuvo acceso, como gerente y como director de la compañía, pudiendo observar en él una caída sistemática y notoria de la tasa de pago de la cartera de La Polar, que disminuyó desde un rango



Foja: 1

8% en el año 2006 a valores el 3% en los años 2010 y 2011. Además dicho informe reportaba los clientes que efectuaban pagos reales, los que presentaban una caída a partir del año 2006 y que se ubicaban en el rango de entre 500 y 600 mil clientes. Pese a ello, la información que se entregaba al directorio, por el falseamiento de la cartera, estuvo en torno siempre a los 1,2 millones de clientes que supuestamente efectuaban pagos. Desde el año 2010, se incluyó en el IDG de Recaudación la información sobre la cartera de colores, tomando razón el demandado, pues bien, con toda esta información a su disposición, y sabiendo perfectamente del impacto que las renegociaciones unilaterales producían en las utilidades de la compañía y el régimen de provisiones, no tuvo en ningún momento la más mínima muestra de intención por frenar el fraude que se fraguaba dentro de la empresa; por el contrario, gracias a su colaboración, negligencia, descuido y deslealtad, pudo mantener engañado al directorio, y al público en general, ya que detentando los más altos cargos dentro de la compañía, no hizo otra cosa que encubrir el fraude, participar en el ardid, y entregar información falsa a los directores, al mercado financiero y a público en general. Siendo tan evidente su responsabilidad, que la SVS sancionó a Pablo Alcalde por haber entregado maliciosamente información falsa; por haberla presentado en relación a la emisión de valores de oferta pública realizada por La Polar; por haber presentado información falsa a todos los accionistas mediante la suscripción de hechos esenciales, estados financieros, memorias o informes relacionados con la emisión de valores de oferta pública por empresas La Polar, los cuales no se condecían con la real situación financiera de la compañía, tanto en su calidad de gerente general y como posteriormente en su calidad de director de la compañía.

Respecto a Julián Moreno de Pablo, arguye que éste tenía la misión de determinar el volumen de las renegociaciones unilaterales que se efectuaban a través de un archivo "Bases Mayo" que incluía, el valor de la cartera, la segmentación por morosidad y las condiciones de renegociación. Con dicha información establecía los montos de cartera que debían ser sujetos a renegociación. Según el procedimiento administrativo seguido ante la SVS, el demandado, estaba plenamente consciente que la determinación de las provisiones se vería afectada con la práctica de las repactaciones s



**Foja: 1**

consentimiento, la que afectaría los indicadores de morosidad y condición de renegociación de los clientes, a partir de los cuales se efectuaba el cálculo de las provisiones. Julián Moreno no sólo participó activamente en la génesis de las repactaciones unilaterales, sino que además, efectuó una serie de gestiones para encubrir la irregular situación que se daba al interior de la compañía, y para engañar al directorio de la sociedad. Además, se suma su participación en el comité de cobranza, que tuvo por objetivo tratar la cartera de clientes morosos.

Respecto a Nicolás Ramírez, señala que en el año 2010, asume como gerente general de la compañía, siendo informado de la existencia de la cartera de colores y los procesos de renegociaciones unilaterales. Formó un comité de cobranza que tenía como objetivo identificar a los clientes con una mayor probabilidad de cobro, de la cartera de colores, así como también, desarrollar mejores prácticas y estrategias de cobranza para esos clientes. Todos los miembros de ese comité conocieron con exactitud el tamaño de la cartera que gestionaban y la condición de morosidad de los clientes. En el procedimiento seguido ante la SVS, se determinó que al menos desde julio de 2010, Nicolás Ramírez, Julián Moreno y María Isabel Farah, trabajaron en la elaboración de una presentación destinada a informar al directorio de la compañía el plan de recuperación de la cartera de colores que fue denominada "cartera E". En las presentaciones al directorio de La Polar, (especialmente la efectuada el 29 de septiembre de 2010), se informó que los clientes de esa cartera correspondían a clientes de alto riesgo y que habían presentado morosidad mayor a 120 días. Nunca se informó al directorio (sin perjuicio que todos los encargados de hacerlas sabían perfectamente), que la cartera de energizados correspondía a la práctica de renegociaciones unilaterales, situación que se encuentra acreditada ante la SVS. El señor Ramírez, lejos de requerir el cese inmediato de dicha práctica y de instar para que se transparentara la situación ante el directorio y ante el mercado en general, la avaló, participando con la demandada señora Farah y los demandados señores Alcalde y señor Moreno en el desarrollo y mantención de ésta.



Foja: 1

En cuanto a la demandada, doña María Isabel Farah, relata que la gerencia corporativa de administración, era encabezada por ella y estaba a cargo de la determinación de las provisiones de la cartera de créditos, usando un modelo de camadas, el cual a partir del análisis del comportamiento de pago de los clientes a través del tiempo, determinaba las tasas de provisión que debían aplicarse a la cartera de créditos, de acuerdo al tramo de morosidad y la condición de renegociado de la acreencia. El cálculo de las provisiones recaía de forma exclusiva en ella, no existiendo un manual de procedimiento interno que contuviera dicho modelo, ni una persona que pudiera reemplazarla en dicha función. Además se encuentra acreditado en la investigación, que en el año 2008 el gerente corporativo de finanzas, Julián Moreno, comunicó al gerente general de la compañía, Pablo Alcalde, y a la gerenta corporativa de administración, María Isabel Farah, acerca de las renegociaciones unilaterales, luego de haber transcurrido al menos dos años desde el origen de dicha práctica. También se encuentra acreditado, que desde fines del año 2008 la información de recaudación de la cartera controlada por Julián Moreno, fue enviada diariamente, tanto a María Isabel Farah, Pablo Alcalde, Pablo Fuenzalida, Santiago Grage, Nicolás Ramírez y Martín González, siendo uno de los ejes centrales de la participación de Farah en este fraude financiero pues, en el desarrollo de sus funciones, la demandada se mantuvo siempre informada respecto de la real situación financiera de la cartera de la empresa, cuestión que se refleja en el contenido de los informes conocidos por la demandada y en el fluido intercambio de información entre la gerencia de gestión, y la subgerencia de cobranza. Además se mantuvo siempre preocupada y pendiente de requerir a distintos miembros de la administración de la compañía, información adicional e incluso de modificar los informes preparados por la gerencia de gestión (IGD), de forma tal de incluir o segmentar la información existente, lo que le permitía efectuar un mejor análisis de la situación financiera de La Polar. Frente a ello, la demandada mantuvo la más absoluta reserva, continuando con su labor e el cálculo de provisiones como si la "normalización" de los créditos existiera, en circunstancias, que estaba al tanto de su práctica y del impacto que ésta tenía en el régimen de provisiones. Tuvo conocimiento que

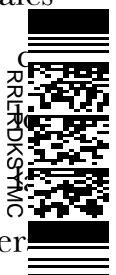


RFLRDISYMC

Foja: 1

información que utilizaba para el cálculo de las provisiones no correspondía a la real situación de la cartera, y a sabiendas de la utilizó para el cálculo de la provisión. A lo anterior, suma el hecho de que a contar de julio de 2010, junto con el señor Ramírez y el señor Moreno, la demandada trabajó en la elaboración de una presentación destinada a informar al directorio de la compañía del plan de recuperación de la cartera E, omitiendo que dicha cartera se refería a clientes repactados de forma automática y sin mediar consentimiento. Por lo que la responsabilidad de la demandada, no es solo respecto a la entrega de información falsa al mercado, sino además, a que sin su labor de coordinación y de falseamiento de la información financiera de la compañía, no hubiera sido posible que el ilícito mecanismo de repactaciones fuese implementado con éxito y se prolongara en el tiempo.

Respecto a don Pablo Fuenzalida, señala que fue la cabeza de la gerencia de informática y logística de La Polar, que creó el sistema computacional de automatización de renegociaciones unilaterales, y que fue el área encargada de cargar la información y ejecutar las renegociaciones automatizadas de acuerdo a las instrucciones dadas por don Julián Moreno. A lo menos desde junio de 2010, fue integrante del comité de cobranzas, tomando conocimiento de la existencia de una cartera de 428.874 clientes que no habían efectuado pagos reales en a lo menos dos años, no obstante su carácter de "vigentes". Además estaba en pleno conocimiento de las repactaciones, y de que éstas se realizaban fuera de las políticas de crédito de la compañía, lo que se prueba con la participación en la sesión de directorio de fecha 26 de enero de 2011, en la que don Julián Moreno informó que para la renegociación de créditos se exigía un pago de al menos el 7,5% de la deuda. A contar de fines del año 2010, por encargo de Nicolás Ramírez, asume un rol principal en la gerencia de productos financieros, emitiendo instrucciones relacionadas principalmente con la cartera de "energizados" e involucrándose mayormente con las repactaciones unilaterales. Teniendo pleno conocimiento de las repactaciones unilaterales y de su impacto en las utilidades de compañía y en el régimen provisiones, participó activamente en comités y sesiones de directorio en que se ocultó la existencia de dicha práctica; por el contrario, frente a consultas formuladas por el directorio por la condición de la carter





**Foja: 1**

siempre entregó información que no se ajustaba a su realidad, y no efectuó ninguna actuación tendiente a remediar el falseamiento de la morosidad, la condición de renegociación de la cartera y el abultamiento artificial de los resultados, producto de mayores ingresos financieros y menores gastos de provisión, aun cuando dicha situación fuera de su directa responsabilidad, desde el momento en que se incorporó a la gestión de la cartera energizada.

En cuanto a don Martín González, explica que éste detentó el cargo de gerente general interino de La Polar. De acuerdo a la investigación seguida por la SVS, tomó conocimiento de las renegociaciones unilaterales mucho antes de asumir su cargo de gerente general y tuvo acceso a una serie de antecedentes que le permitieron conocer que la práctica de dicho tipo de renegociaciones fue aplicada a una parte importante de la cartera, en específico a la cartera conocida como energizada. Entre otros, fue destinatario habitual de los informes mensuales que se presentaban al directorio, respecto del resultado del plan de recupero de la cartera de clientes energizados. En su calidad de gerente general interino, conocía la forma en que eran calculadas las provisiones en La Polar y estaba en pleno conocimiento que cualquier distorsión de la morosidad y en la condición de renegociación de la cartera incidía de manera directa en la determinación de las mismas. Conocía y sabía que el directorio estaba en la falsa creencia que la cartera renegociada de La Polar era inferior a un 20%, y que para hacer las renegociaciones se requería de un pie mínimo, resultando cualquier tipo de renegociación sin consentimiento fuera de las políticas de la compañía. Pese a lo anterior, no hizo nada por revelar la verdadera situación financiera de la compañía al directorio, al mercado y al público en general. En los meses de marzo y abril de 2011, suscribió las declaraciones de responsabilidad de los estados financieros de La Polar correspondientes al ejercicio 2010 y marzo 2011, los cuales no reflejaban la verdadera situación de la cartera de créditos de la compañía, ni la de sus resultados.

En cuanto a don Santiago Grage, gerente corporativo de finanzas, fue el encargado de entregar la información financiera para las clasificadoras de riesgo y bancos, para lo cual requirió del apoyo de las gerencias corporativas de administración y de productos financieros. Dicha labor



**Foja: 1**

coordinación le significó la posibilidad de estar en permanente conocimiento de la información referida a la cartera de créditos. Asimismo, tuvo acceso a la información que le era presentada al directorio en relación a la cartera de créditos de La Polar, y tuvo conocimiento de la existencia del comité de cobranzas formado el 2010 por el señor Ramírez. Se encuentra acreditado en el procedimiento sancionatorio que tuvo conocimiento de antecedentes suficientes y necesarios para identificar las señales de alerta de un inadecuado comportamiento de la cartera crediticia de la compañía.

Hace presente que ninguno de los demandados efectuó actuación alguna tendiente a remediar el falseamiento de la morosidad y el abultamiento artificial de los resultados de la compañía, que era comunicada a las autoridades y al mercado financiero en general, ya que valiéndose de sus altos cargos, mantuvieron por años el engaño y se beneficiaron personalmente con él aumentando sus propios patrimonios al recibir mayores ingresos como consecuencia de la supuesta sanidad y éxito comercial de la compañía. Lejos de una actitud que permitiera advertir alguna muestra de decencia, las únicas actuaciones que se observan de parte de los ejecutivos principales demandados es el encubrimiento de esta situación, pues todos estaban al tanto de la existencia de las repactaciones unilaterales, que dichas renegociaciones no se efectuaban con ningún tipo de prepago o aporte en efectivo, del impacto que las renegociaciones producían en su ingresos y bonos; y finalmente del falseamiento de información que se entregaba al directorio de la compañía, al mercado y al público en general, confabulándose todos en el mayor ardid y mayor desastre financiero de la historia del país, causando con su actuar cuantiosos perjuicios a los fondos administrados por la demandante.

La doctrina nacional señala que los directores de sociedades anónimas, los gerentes y sus ejecutivos principales, tienen los siguientes deberes para con la sociedad y sus accionistas: a) el deber general de cuidada administración, que es el correlativo a las potestades que le son conferidas; b) el deber de lealtad, que resulta de la relación fiduciaria que surge por el hecho de administrar intereses ajenos y que exige que subordine el propio interés al de la sociedad, cuando se actúa en el ejercicio



Foja: 1

del cargo; c) el deber de rendición de cuenta propio de quien administra negocios ajenos; y d) los deberes de información, que se establecen tanto respecto a los accionistas, en sus relaciones internas con la sociedad, como al público en general, en resguardo de la confianza y transparencia en los mercados de valores. Sin perjuicio que, el deber más esencial de los ejecutivos principales es aquel que se refiere al cuidado y diligencia que deben aplicar en el ejercicio de su cargo, por lo que responden por culpa leve. Los demandados de manera dolosa y/o negligente, falsearon la realidad financiera de la compañía, y entregaron al mercado y al público en general información falsa, causando con sus actos no solamente cuantiosos perjuicios económicos a los inversionistas de La Polar, dentro de los que se encuentran los fondos administrados por la demandante, sino que un grave daño a la fe pública.

En cuanto a la responsabilidad extracontractual señala que el deber de conducta de los demandados se encuentra establecido en la ley, y en los estatutos de la sociedad, no existiendo un consentimiento en el sentido contractual propiamente tal. Los gerentes y/o ejecutivos principales no tienen propiamente una obligación contractual con los accionistas, de las que pueda desprenderse la existencia de una prestación de "dar", "hacer" o "no hacer", cuya ejecución o cumplimiento forzado pueda solicitarse mediante las reglas de la responsabilidad civil contractual. En cuanto al factor de imputabilidad, se requiere de un factor de imputación, esto es, ante la culpa o dolo del autor del daño que trajo como consecuencia perjuicios que se reclaman. La culpa o dolo debe ser probado por quien solicita se condene al demandado al pago de la indemnización de perjuicios, la que tiene su excepción en la denominada "culpa infraccional" que es aquella que se desprende directa e inmediatamente de la infracción a una disposición legal por parte del autor del daño.

El artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, dispone que toda persona que infrinja dicha ley, su Reglamento o los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia, ocasionando daño a otro, es obligada a la indemnización de perjuicios, además de las restantes sanciones que correspondan a cada caso particular. Por su parte, la Ley de Mercados



Foja: 1

de Valores establece en el artículo 55 que todos quienes infrinjan las disposiciones de esa ley *"sus normas complementarias o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligado a la indemnización de los perjuicios..."*. La particularidad de este tipo de responsabilidad es que el acto es tenido por ilícito sin que sea necesario entrar en otras calificaciones. Los demandados con su actuar ilícito han infringido ciertas normas contenidas en la LSA y en la LMV, siendo sancionados por la SVS por haber entregado información falsa al mercado, a la superintendencia y al público en general. Siendo dichas infracciones la causa directa de los perjuicios sufridos por los fondos administrados por la actora, deben tenerse los actos efectuados por los demandados como ilícitos, esto es como culpables, y proceder éstos al pago solidario de los perjuicios sufridos por los fondos de inversión administrados por la demandante. Las conductas de los demandados no se condicen con el deber de diligencia y cuidado impuesto por las leyes, con el deber de información que le deben a los accionistas y al público en general, por haberse beneficiado ilícitamente con el fraude fraguado y haber obtenido por años suculentos bonos en atención a la artificial y falsa supuesta sanidad y éxito de la compañía, privilegiando los propios intereses personales por sobre los intereses sociales. Atenta e infringe el deber de información que los propios demandados tienen respecto de los accionistas y el público en general, ocultar por años la verdadera realidad financiera de la compañía, y entregar a la Superintendencia, al mercado y al público en general información falsa y manipulada en función de sus propios intereses en perjuicio de los inversionistas de la sociedad. Los demandados son también responsables solidariamente por expresa aplicación del artículo 41 de la LSA que establece una regla general de responsabilidad para los ejecutivos principales, pues éstos responden por culpa leve por los daños causados a los accionistas de la sociedad por sus actuaciones dolosas o culposas, y también son responsables por expresa disposición de los artículos 2314 y siguientes que establecen las reglas generales a propósito de la responsabilidad civil extracontractual.

Uno de los requisitos para estar frente a la responsabilidad civil es la existencia de daños o perjuicios, incluso aquellos derivados de la culpa



**Foja: 1**

infraccional. Además es necesario que exista una relación de causalidad entre los hechos que constituyen las infracciones y el daño que se ha causado a los fondos administrados por la demandante. En cuanto al daño, se reconocen tradicionalmente los daños de tipo patrimonial y extrapatrimonial. Dentro de los primeros encontramos al daño emergente y al lucro cesante, y dentro de los segundos, encontramos al daño moral. Con fecha 9 de junio del año 2011, La Polar S.A. remitió a la SVS un hecho esencial, en el cual informó que a través de las sesiones de los días 6 y 8 de junio de 2011, el directorio de la compañía tomó conocimiento de una serie de prácticas en la gestión de su cartera de créditos que se habían efectuado de forma no autorizada y en disconformidad a los criterios y parámetros establecidos por dicho órgano, que tenían que ver con un sistema de "normalización de créditos", mediante el cual y a través de renegociaciones unilaterales sin pie, se mantenía artificialmente como vigente la cartera de clientes morosos. La práctica de renegociaciones de créditos sucesivas en el tiempo tuvo resultados positivos en los estados financieros de La Polar, que implicó una reducción en el volumen de las provisiones y castigos que debían aplicarse por tales deudas. Asimismo, los intereses registrados producto de las renegociaciones se contabilizaban como ingresos, todo lo cual afectó los resultados de la empresa al hacerla aparecer artificialmente con mayores ingresos a los que realmente percibía. Como resultado y consecuencia de la discordancia entre lo informado al mercado y la realidad de la compañía, anunciada por el hecho esencial del 9 de junio de 2011, se siguió un escándalo y catástrofe financiera de gran repercusión. El 13 de junio la transacción de las acciones de La Polar fue suspendida por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. El 20 de junio de 2011 las acciones de La Polar se habían desplomado en la bolsa local, llegando el precio de la acción de la compañía a \$533,54, en circunstancias que el día 8 de junio los títulos se transaban a \$2.336,2 cada uno. A una semana de la suspensión, los bonos de La Polar reflejaron un aumento del riesgo de pago de la deuda, las transacciones de éstos bajaron a un poco más de \$79.000.000.-, frente a los \$500.000.000.- que se podían negociar en un mercado normal. Este escándalo financiero fue de tal magnitud que con la finalidad de impedir la quiebra de La Polar, tuvieron que adoptar medidas



**Foja: 1**

emergencia, dentro de las que se encuentran el aumento de capital de US\$200.000.000.- y la aprobación de un convenio judicial preventivo por los acreedores de La Polar con fecha 7 de noviembre del año 2011. Como muestra de la falsa información vertida al mercado financiero en general, basta comparar los balances de La Polar del año 2011, en el mes de marzo de ese año que presenta a la compañía como una sociedad atractiva, sana y bien administrada y en julio de 2011, habiéndose auditado por la empresa de auditores Ernst & Young, luego que estallara el escándalo financiero, muestra el verdadero estado financiero de la compañía, correspondiente a una sociedad en bancarrota, imposibilitada de hacer frente a sus obligaciones y con un patrimonio negativo que bordeaba los -\$218.389 millones. Todo lo anterior trajo por consecuencia enormes pérdidas de accionistas de La Polar, quienes desinformados, mantuvieron inversiones cuantiosas en una compañía cuyos resultados financieros fueron falseados y manipulados, no realizando ni la más mínima conducta de poner remedio a este fraude del que fueron parte, beneficiándose personalmente de él a través de los incentivos económicos recibidos a causa la supuesta sanidad financiera de la que gozaba la compañía y utilizando en algunos casos, en su propio interés, la información privilegiada obtenida en razón de sus cargos. Los principales aportantes de los fondos de inversión administrados por la demandante son fondos de pensiones y, por lo tanto, la pérdida sufrida se traduce, en perjuicio de millones de chilenos cotizantes. En su conjunto los fondos de inversión administrados por la demandante, como accionista de La Polar, al 8 de junio de 2011 poseía un total de 13.108.876 acciones, equivalente a un 5,3% de la propiedad de la Compañía aproximadamente. A partir del 9 de junio de 2011, se inició un periodo de incertidumbre respecto de la real situación económica y financiera de la compañía, la que se mantuvo hasta fines de noviembre de 2011, puesto que Ernst & Young, dio a conocer los nuevos estados financieros de La Polar, revelándose al mercado, en forma auditada y completa, cifras de ingresos, costos y gastos de La Polar de gran relevancia en la valorización de instrumentos financieros, por lo que sólo a partir de ese momento los inversionistas, pudieron disponer de información que les permitiera estimar el valor de los activos a su cargo, como también los niveles de riesgo



Foja: 1

soportar, cayendo el precio de la acción de La Polar a niveles significativos. La inversión inicial de los fondos administrados por Moneda ascendente al 8 de junio de 2011 a \$30.607.259.129 quedó reducida, al 30 de noviembre de 2011, (excluyendo al fondo Champion) a \$4.797.067.410.- equivalente a UF215.953, a dicha cifra se debe sumar la pérdida experimentada por el fondo Champion, que ascendió a \$387.466.445, equivalente a UF 17.777, pero que vendió las acciones La Polar entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2011. Los fondos de inversión que administra la demandante sufrieron cuantiosos perjuicios económicos producto de la irregular situación ya descrita.

En cuanto a la relación de causalidad, señala que los demandados de manera solapada y en algunos casos concertada, escondieron voluntariamente la situación real financiera de la compañía, no revelando, pudiendo hacerlo, el fraude que se daba al interior de La Polar, estando en pleno conocimiento de la existencia de las repactaciones unilaterales y del impacto de éstas en el régimen de provisiones y en los estados financieros de la compañía. Como consecuencia directa de la ilegítima conducta de los demandados, los fondos de inversión que administra, sufrió gravísimos perjuicios, que no se habrían producido si hubiesen cumplido diligentemente con sus obligaciones legales y leales en el cometido de su cargo. De haberse conocido oportunamente la real situación financiera de La Polar, su representada no habría mantenido al 9 de junio de 2011 la inversión en valores que efectivamente tenía a ese momento y, no habría sufrido la pérdida patrimonial que le significó la brusca caída en el valor de las acciones de La Polar que poseían los fondos que administra.

Es por dichas consideraciones que solicita se tenga por interpuesta demanda en juicio sumario en contra de los demandados, ya individualizados, solicitando sea acogida la demanda en todas sus partes y que, en definitiva, se declare que los demandados de este juicio con su ilícito actuar han causado perjuicios a los fondos de inversión administrados por su representada y, como consecuencia de ello, se les condene solidariamente pagar dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo, por concepto indemnización de perjuicios las siguientes sumas de dinero, según



**Foja: 1**

equivalente en pesos que tenga la Unidad de Fomento, o la que la reemplace al día del pago efectivo, correspondientes a las pérdidas sufridas por cada uno de los fondos de inversión que administra Moneda: UF 61.856.- correspondiente a la pérdida sufrida por el fondo de Inversión Moneda Small Cap Latinoamérica, administrado por Moneda; UF 994.019.- correspondiente a la pérdida sufrida por el fondo de inversión Pionero administrado por Moneda; UF 71.765.- correspondiente a la pérdida sufrida por el fondo de inversión Moneda Chile Fund LTD administrado por Moneda; UF 13.257.- correspondiente a la pérdida sufrida por el fondo de inversión Moneda Renta Variable Chile administrado por Moneda; UF 17.777.- correspondiente a la pérdida sufrida por el fondo de inversión Champion administrado por Moneda; o la cantidad superior o inferior que se determine conforme al mérito del proceso. Cualquiera sea la suma a la que en definitiva resulten condenados los demandados, solicita que dicha condena imponga, además, el pago de intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables a contar de la fecha de notificación de la demanda y hasta la fecha de pago efectivo, todo ello con expresa condena en costas.

A fojas 56 (55), se tuvo por notificado de la demanda a don Julián Moreno de Pablo.

A fojas 133 (131), consta notificación de la demanda a don Santiago Enrique Grage Díaz.

A fojas 134 (132), consta notificación personal de la demanda a don Pablo Fuenzalida May.

A fojas 135 (133), consta notificación de la demanda a don Pablo Alcalde Saavedra.

A fojas 136 (134), consta notificación personal de la demanda a don Nicolás Ramírez Cardoen.

A fojas 137 (135), consta notificación de la demanda a doña María Isabel Farah Silva.

A fojas 142 (140) y siguientes, se acogió el incidente de acumulación deducido a fojas 120, acumulándose el expediente Rol C-22651-2014





**Foja: 1**

caratulado “Moneda S.A. con Pricewaterhousecoopers Auditores, Consultores y Compañía Limitada”, tramitada ante el 23° Juzgado Civil de Santiago.

A fojas 161, consta notificación personal de don Martín Andrés González Iakl, según exhorto acompañado en autos del 1° Juzgado de Letras de Talagante.

A fojas 307 (633), se llevó a efecto la audiencia de estilo con la asistencia de los apoderados de los demandantes y del demandado don Pablo Alcalde Saavedra, junto a sus apoderados; don Nicolás Ramírez Cardoen, junto a su apoderada; don Pablo Fuenzalida May, con su apoderado; don Julián Moreno de Pablo, con sus apoderados; y PriceWaterhouse, demandada en la causa acumulada, junto a su representante, y en rebeldía de los demás demandados.

La parte demandante ratificó la demanda en todas sus partes, con costas; y se suspende la audiencia en virtud de escritos presentados por los demandados, que fundan en lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil y sustitución del procedimiento.

A fojas 165 (491), rola contestación de la demanda de don **Pablo Fuenzalida May**, señalando que su calidad de Gerente de informática y logística, requería modernizar la compañía para soportar su crecimiento, e incorporar nuevas tecnologías. En el año 2007 La Polar S.A., lo nombró Gerente corporativo de informática y logística, enfocándose en capacitar a los nuevos integrantes del equipo y delegar en ellos parte de sus funciones, dedicándose al rediseño de los procesos de compras de la compañía. Durante el 2010, el objetivo de su gestión estuvo en la implementación de los procesos rediseñados de compra y el apoyo al proyecto de internacionalización de la compañía. A fines de junio de 2010, Nicolás Ramírez le solicitó participar de un grupo encargado de generar mejores prácticas para el cobro de una cartera de clientes que tenían como principal característica malos hábitos de pago, denominada “cartera especial” “cartera energizada”. Al no rendir este grupo con lo esperado, Nicolás Ramírez, le solicita una participación más activa en el proceso, que consista



**Foja: 1**

en seleccionar un grupo de clientes para hacerles cobranza telefónica, y si no respondían publicarlos en Dicom, para luego iniciar el protesto del pagaré y demandar judicialmente hasta llegar al embargo. Los documentos legales que amparaban estos procesos habían sido preparados por los abogados de la empresa. En enero de 2011 se le instruye para participar en un informe sobre clientes de la “cartera especial” para ser presentado a un Comité de Directores en conjunto con María Isabel Farah y Julián Moreno. En ese momento, por primera vez se le informó parcialmente del proceso de endeudamiento de los clientes, su origen, posteriores dificultades de pago, y el ofrecimiento que hacía la compañía de productos financieros para regularizar su situación crediticia. A fines de marzo de 2011, presentó un plan que iniciaba cobranza a veinte mil clientes mensuales en el transcurso de dos años. A fines de abril del 2011, presentó un importante avance del plan de recuperación, solicitando los directores recién en ese momento hacer un análisis detallado ya no del plan de recuperación, sino de la cartera completa de La Polar, separando los tipos de clientes y descomponiéndolos por tramos de mora. En mayo del 2011 verificó los números, descubriendo que existe una inconsistencia entre los valores obtenidos y las cifras que se manejaban, informando de inmediato a Pablo Alcalde, es así que presenta su investigación en pleno al Directorio. Durante esos días la compañía fue notificada de la demanda del Sernac, por lo cual se le solicitó trabajar activamente con la gerencia general y con el directorio. Tras el despido de Julián Moreno y de Farah, se le solicita hacerse cargo de las áreas de las cuales estaban ellos encargados, en paralelo a la implementación del plan de compensaciones para clientes afectados por las renegociaciones unilaterales. También se le solicitó hacerse cargo de la firma de los cheques girados porque contaba con poder de firma B. Hace presente que siempre recibió un respaldo por su labor.

Por resolución N° 86 de la SVS se le aplicó una multa de UF.7.500, basándose en que en Empresas La Polar S.A. se desarrolló una práctica que tenía por objeto poner al día a clientes que se encontraban en mora, lo cual se materializaba mediante la renegociación sin consentimiento o unilateral de los créditos otorgados a los clientes, que se inició el año 2001, y se automatizó el año 2009, cuyo volumen se determinaba por Julián Moreno.



**Foja: 1**

que se identificó con colores y se le dio un tratamiento diferenciado del resto de la cartera. Explica que desde junio del 2010 integró el comité de cobranzas, y a principios de enero del 2011 mantuvo un rol en la Gerencia de productos financieros emitiendo instrucciones con la cartera de colores o energizada y con los procesos de renegociaciones unilaterales, dando la SVS por establecida su participación en la práctica de renegociaciones unilaterales y la elaboración de información falsa. Para la SVS, por el hecho de haber dado instrucciones respecto de la cartera especial, lo hace responsable de la exactitud de los indicadores de morosidad y condición de renegociado de los clientes de la cartera energizada, por ser esos indicadores el resultado de procesos que eran dirigidos, conjuntamente con Julián Moreno, atribuyendo además que por el solo hecho de haber participado en una reunión del comité de directores en la que María Isabel Farah explicó la forma en que ella realizaba las provisiones por la compañía, significaba que sabía y ocultaba información al Directorio sobre la verdadera morosidad de la cartera energizada y sobre la condición de la renegociación de la misma. En relación a la sanción de la SVS, respecto a la entrega de información falsa, la norma establecida al respecto, no solo está circunscrita a la SVS, sino también se extiende a toda información que por su naturaleza deberá ser remitida a la autoridad fiscalizadora o mercado en general; señalando que por su calidad de “co-gerenciador” de la cartera energizada tuvo un deber fiduciario, que habría influido en la confección de los estados financieros de la compañía a lo menos desde enero de 2011, y que desde esa fecha habría asumido el rol de garante de la veracidad remitida. En relación a la acusación de haber cometido la conducta del art. 59 letra a) de LMV, la SVS señaló que se formó la convicción de su participación por la elaboración de información falsa indispensable para la confección de estados financieros de la compañía, desde enero de 2011 hasta el 9 de junio del 2011. En relación al cargo de uso de información privilegiada, conducta tipificada en los artículos 164 y 165 de la LMV, la SVS refiere que tenía información acerca de que una parte significativa de la cartera que presentaba problemas de morosidad y era objeto de renegociaciones unilaterales, lo cual califica de información privilegiada porque dicha práctica no era transparentada al mercado e influía en



**Foja: 1**

cotización de las acciones de la compañía lo que importaba el conocimiento real de la situación financiera de la compañía. La SVS reconoce que las acciones que le correspondieron en el plan de compensaciones para ejecutivos del controlador Southern Cross del 2006, alcanzaron la cantidad de 798.000 la cuales adquirió por préstamo de UF 64.670 otorgado por Renta INF SA, garantizado por prenda de las mismas acciones; también las que adquirió en octubre del 2006 (221.315 acciones), a través de su sociedad Los Siete, y otras 422.488 a través de Siglo XXI Dos S.A., que fueron financiadas parcialmente con un crédito otorgado por el BCI, garantizado con prenda de las acciones. También confirmó la SVS, que en abril del 2007, hace uso de su opción preferente para suscribir acciones de primera emisión. La SVS concluye que la venta de las acciones de su propiedad, fue justificada para pagar créditos contraídos para la adquisición de las mismas. En cuanto a su participación en el ilícito imputado, la SVS declaró que no pudo formar convicción respecto a que las operaciones anteriores al 25 de junio de 2010, haya estado en conocimiento de los problemas de morosidad de la cartera, y por ende en posesión de información privilegiada. En relación a las ventas de acciones efectuadas los días 25 y 30 de junio; 1, 6 y 7 de julio del 2010, la SVS consideró que tales ventas se hicieron cuando él estaba en posesión de información privilegiada, motivado por la existencia de la cartera de colores y el continuo empeoramiento de la situación financiera de la compañía.

De todas formas, hace presente que reclamó judicialmente la Resolución N° 86 de la SVS, presentando un recurso de reclamación de la multa administrativa en contra de la SVS, tramitándose ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol N° C-8054-2012. Dicha resolución motivó además un amparo profesional que fue acogido por el Colegio de Abogados, mediante Acuerdo de fecha 14 de diciembre del 2011, recordándole al Superintendente que el Estado de Derecho descansa, en el reconocimiento del libre ejercicio de la abogacía, de la que es consustancial la libertad del abogado para defender a su cliente, y que es imprescindible que los procedimientos sancionatorios de los órganos que ejercen jurisdicción no impidan la defensa letrada ni dejen a los abogados en imposibilidad de cumplir con sus deberes para con sus representados.



Foja: 1

Relata que la demandante hace suya la imputación de la SVS y da por

establecida su participación en la práctica de renegociaciones unilaterales y la elaboración de información falsa, citando al efecto su integración al comité de cobranzas. Al respecto, reitera que nunca proporcionó datos o antecedente falso ni a algún ejecutivo de La Polar ni menos al mercado, por lo que el cargo que se le hace es absolutamente infundado. La demandante omite el hecho de que la política de crédito de la compañía no estaba bajo la responsabilidad de su área, y el conocimiento que pudiera haber tenido de aquello le resultaba muy lejano, y cualquier renegociación que se hiciera estaba plenamente ratificado por la presencia y aprobación de los gerentes general Nicolás Ramírez, y gerente corporativo de productos financieros, Julián Moreno, quienes eran los encargados de definir e implementar la política de créditos.

Respecto a las renegociaciones automáticas, señala que eran una cuestión usual a cargo de Julián Moreno, justificándose en el mandato contenido en el contrato de línea de crédito suscrito los clientes que tenían tarjeta de crédito, situación de la cual jamás repararon en su legalidad. Las renegociaciones de los créditos de los clientes son actos jurídicos válidos, puesto que ninguna sentencia dictada por un órgano jurisdiccional ha declarado su nulidad, por lo que el conocimiento de las renegociaciones automáticas de créditos, que pudiese tener en el tema, no puede ser sustento de cargo de infracción a los deberes de lealtad y fidelidad que menciona la demandante.

En cuanto a su participación en la estructuración del proceso de cobranzas, señala que comienza en enero del 2011, a solicitud del Gerente General Nicolás Ramírez, como un apoyo profesional al proceso liderado por la Gerencia a cargo de Julián Moreno, que no mostraba avances. Lo primero que hace es determinar el proceso de cobranzas de esa cartera especial, luego establecer los controles, y determinar los deudores de I Polar a los que se debía iniciar dicho proceso, cumpliendo con lo que se había instruido por la Gerencia General. Expone que nunca tuvo participación en la elaboración de las Fichas Económicas Codificadas.



**Foja: 1**

Uniformes (FECU) trimestrales, ni en los Balances, Estados Financieros, que fueron entregados a la SVS, y al mercado en general, ni jamás suscribió alguno de esos documentos, negando su participación en los hechos que pudieren significar una infracción a los deberes de lealtad y fidelidad a la compañía. Su función en La Polar S.A. nunca se relacionó con la preparación de información que se entregaba a los órganos regulatorios o al mercado en general: ni tampoco elaboró ni entregó información a la SVS ni al mercado de ningún tipo o especie, ni menos falsa.

En cuanto a la imputación de infracción del artículo 165 de la LVM, expone que para que una información pueda ser calificada legalmente como privilegiada es necesario que se den las siguientes tres condiciones: que se refiera en forma precisa a los emisores, valores o negocios de los mismos; que no haya sido divulgada; y, que sea de naturaleza tal que pueda influir la cotización de los valores. Hace presente que nunca tuvo información privilegiada acerca de la real situación financiera de La Polar S.A.

Refiere que sus actuaciones en La Polar fueron validadas por los Tribunales superiores de justicia, en el sentido que no tuvo relación alguna con las renegociaciones automáticas y menos con el cálculo de las provisiones

de la compañía, despejando cualquier duda acerca de que si su conducta importó algún quebrantamiento al deber de fidelidad y lealtad para con su ex empleador, sin perjuicio de que la demandante no fue parte en el juicio laboral que interpuso en contra de La Polar S.A., por lo que si ya existe una declaración jurisdiccional en que se declara que no tuvo responsabilidad alguna en las renegociaciones automáticas ni en el cálculo de las provisiones derivadas de los créditos que otorgó La Polar S.A., no puede construirse responsabilidad alguna por los daños que la demandante reclama en estos autos, debiendo rechazarse la demanda en su contra.

Hace presente que se desempeñó correctamente en el ejercicio de su cargo, lo que le fue reconocido por la justicia al ordenarle a La Polar S.A. el pago de sus beneficios laborales, y no ha infringido ninguno de los deberes que la Ley de Sociedad Anónimas impone a los gerentes y que pudieran acarrear perjuicio a terceros. La inversión en acciones es altamente riesgos



Foja: 1

y la volatilidad en el precio de ellas, es propio de los mercados bursátiles, por lo que la valoración de una cartera no es suficiente para acreditar un daño en el patrimonio de un inversionista. El daño solo se produce una vez que se enajenan las acciones, lo que a la fecha no ha ocurrido, con excepción del Fondo Champion. Por lo que controvierte que los fondos demandantes, con excepción de Champion Fondo de Inversión Privado, haya soportado un daño patrimonial, ya que su inversión inicial en acciones La Polar sigue vigente, según se desprende de la propia demanda, y sin que se pruebe ese requisito esencial de la responsabilidad extracontractual, necesariamente la demanda debe ser rechazada. También existe una falta de relación de causalidad, toda vez que le parece evidente que de ser efectivos los perjuicios que reclaman, éstos encontrarían su causa directa e inmediata en la decisión de inversión en un papel que el mercado estimaba riesgoso, y no en la supuesta falta de fidelidad o lealtad del suscrito.

Los hechos que en la demanda se le imputan datan del año 2000 al 2011. Concretamente, el primer acto que se imputa en la demanda sería el ejercicio de su cargo de Gerente de informática del año 1999 y el último, su participación en el comité de cobranzas de junio del 2011, siendo notificado de la demanda de autos el 30 de enero del 2015, encontrándose las acciones indemnizatorias referentes a dichos actos y todos aquellos que antecedieron al 30 de enero del 2011, prescritas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2332 en relación al 2514, ambos del Código Civil. De acogerse la pretensión de la demandante se llegaría a situaciones absurdas, como que personas que han sido desvinculadas de sus cargos, como el caso de autos, queden obligadas a revisar situaciones consolidadas lo que afectaría sus derechos adquiridos, pasando a llevar los principios de la certeza jurídica, inherentes y esenciales al derecho y en particular a la institución de la prescripción. Toda acción se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2332 y 2514 del Código Civil. Por tanto, la acción de autos debió ejercerse dentro del plazo respectivo y no se hizo, extinguiéndose su derecho a la acción, en todo lo que dice relación con actos anteriores al 30 de enero del 2011. Por dicha consideración, es que opone la excepción



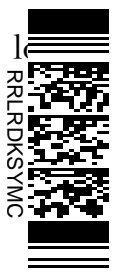
Foja: 1

de prescripción establecida en el artículo 2332 del Código Civil, declarándose la prescripción de la acción intentada, en todo lo que dice relación con actos anteriores al 30 de enero del 2011, por haber transcurrido más de 4 años desde la ocurrencia de los hechos que la demandante le imputa y la época de notificación de la demanda,

A fojas 268 (594), contestó la demanda el demandado don **Nicolás Ramírez Cardoen**, solicitando su rechazo, con costas. En lo sustantivo, sostiene que el método de cálculo del “*daño*”, está mal planteado, por no considerar “*la fecha de la adquisición respectiva y calcularlo a esa data.*”. Abunda al respecto señalando que la demanda no precisa fechas exactas ni precios de adquisiciones, respecto de cada fondo que administra. Luego efectúa una extensa explicación que conducen a dicho demandado a afirmar que “*no conoció las maniobras fraudulentas en cuestión, de modo que no incurrió en ninguna de las conductas que se le imputan en la demanda, no incurrió ni en dolo, ni en culpa, y es víctima de los hechos*”. Agrega que ejerció la gerencia desde enero de 2010, participando sólo desde esa época en la remisión de los informes financieros a la SVS, y antes de dicha fecha sólo desarrollaba funciones puramente comerciales, sin incidencia en el suministro de información financiera al mercado o a la autoridad. Asimismo, aclara que no sabía de la existencia de las renegociaciones unilaterales de orden masivo y sistemático, de una dimensión capaz de alterar sustantiva y materialmente los estados financieros de la compañía.

A fojas 358 (684), se desestimó el incidente de sustitución de procedimiento deducido por Pablo Fuenzalida May; se acogió la suspensión del procedimiento deducido por Pablo Alcalde Saavedra y por Julián Moreno De Pablo. Que asimismo, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de don Santiago Grage Díaz, Martín González Iakl y doña María Isabel Farah Silva.

A fojas 492 (544), se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldía de los demandados. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.





Foja: 1

A fojas 495 (552), se recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose la que consta en autos.

A fojas 545 (602), se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento respecto de don Pablo Alcalde Saavedra y don Julián Moreno De Pablo, citándolos a una audiencia de contestación y conciliación.

A fojas 571 (628), rola contestación de don **Pablo Alcalde Saavedra**. Hace presente que la demanda no puede prosperar, en cuanto el demandante no cumple con el requisito legal establecido en el artículo 133 bis de la Ley 18.046, es decir, poseer a lo menos el 5% de las acciones de la compañía, mínimo establecido en la ley para autorizar este tipo de acciones, y tampoco con los requisitos del artículo 17 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros, que confiere legitimación activa para interponer demandas indemnizatorias en representación de los fondos de inversión que administra. Las imputaciones son vagas y evitan señalar hechos concretos que configuren un hecho culpable o doloso causante del daño que demanda. Los hechos directamente causantes de los supuestos perjuicios demandados son, según la demandante, aquellos desplegados por la empresa auditora, Pricewater House Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, y no por él. Señala que no estuvo vinculado a operaciones con acciones de La Polar que puedan considerarse un móvil para haber actuado de modo indebido. La falta de incentivos económicos se ve reflejada, en el hecho que la misma Resolución Exenta N° 083 de la “SVS” lo absolvió del único cargo que suponía un provecho económico por uso de información privilegiada, al igual que el Ministerio Público, dado que comunicó al 2° Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en esta imputación respecto de él.

Expone que los otros demandados si efectuaron operaciones de compra y venta de acciones de La Polar haciendo uso de información privilegiada, hecho que fue declarado por la SVS. Sin embargo, el nivel de diligencia que le impone la ley a la demandante, en su calidad de inversionista experto y de administradora de dineros ajenos, se rigen por leyes especiales de cuidado, por lo que antes de atribuir responsabilidades a terceros, debe revisar que tipo de responsabilidad le cabe respecto de las decisiones d



Foja: 1

inversión que tomó y que son las causantes de las pérdidas que sufrió. El demandante es un inversionista calificado, especialista en la materia, calidad que es reconocida en diversas leyes, entendiéndose por tales aquellos que realicen habitualmente operaciones con valores por montos significativos o bien que por su profesión, actividad o patrimonio se presuma que poseen un conocimiento acabado del funcionamiento del mercado de valores, debiendo emplear un estándar de cuidado elevado en su actuar como inversionista. Además, las administradoras reciben comisiones en base a las inversiones que realizan con dineros ajenos, por ello es responsable por el actuar negligente que pueda desplegar en la administración e inversión de los fondos que gestiona, siendo evidente que la ley pretende proteger los dineros de los terceros. La misma información cuyo análisis negligente predica respecto de PwC, era fácilmente accesible y estuvo a disposición de la demandante, porque ella es en parte dueña de La Polar, en su calidad de accionista, y por tanto tenía la capacidad de influir en decisiones relevantes de la empresa. Refiere que la demandante no cumplió con el requisito, de poseer al momento de accionar en su contra con el 5% de las acciones de La Polar. Agrega que los fondos por los que demanda no podrán recibir indemnización alguna, por incumplimiento del artículo 17 de la ley 20.712, *por cuanto no tienen personalidad jurídica propia, ya que se trata de un patrimonio de afectación integrado por los aportes de los partícipes del mismo, que se destinan a inversiones determinadas por la ley. La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualesquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualesquiera de las actuaciones prohibidas a que se refieren los artículos 22 y 23 de la presente ley. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables del reembolso, que incluirá el daño emergente y el lucro cesante. Se autoriza a la Administradora a demandar en juicio sumario a efectos de obtener indemnizaciones de los daños y perjuicios que luego deberán ser traspasadas al fondo de un monto previamente determinado por un reglamento interno. En este caso los reglamentos internos de los fondos representados por la demandante*



**Foja: 1**

cumplen con el requisito legal, ya que sólo establecen un plazo, pero no dicen nada respecto a la forma y al mecanismo de traspaso de la indemnización al fondo, motivo por el cual no tiene legitimación activa. Hace presente que no obstante la vaguedad, queda claro que la demanda persigue sea condenado en calidad de responsable solidario, junto a personas con las que no es posible construir dicha responsabilidad. Señala que el libelo es inepto e impide una adecuada defensa, ya que se vale de referencias generales destinadas a demostrar su participación en las distintas gerencias corporativas de La Polar, que no contienen un relato de hechos concretos, prefiriendo recurrir a una decisión administrativa que no se encuentra ejecutoriada. Tampoco aporta antecedentes mínimos para entender el supuesto daño que alega. Hace presente que respecto a la condena solidaria, debe seguirse la regla general en materia de responsabilidad civil; sin embargo, la solidaridad es excepcional y solo puede provenir de la convención, el testamento o la ley, restringiéndose la aplicación del artículo 2317 del Código Civil a aquellos casos en que existe una concertación dolosa para engañar a un tercero, o cuando dos diversos hechos culpables pueden ser calificados como uno mismo, siendo que en la especie no existió un acuerdo ni un mismo hecho. Los hechos imputados no pueden ser considerados como una misma actuación respecto de los hechos imputados al resto de los demandados.

El juicio abreviado no determinó la existencia de su responsabilidad civil, ni de perjuicios causalmente atribuirles, debiendo el demandante acreditar los elementos de la responsabilidad civil. No existe relación de causalidad entre los perjuicios demandados y hecho ilícito alguno que supuestamente haya cometido; además la responsabilidad civil tiene como fundamento último la existencia de daños, pues la sola negligencia no es fuente de responsabilidad. De la propia demanda se advierte la ausencia de la relación causal entre el hecho generador de responsabilidad y los hechos que se le atribuyen. No parece lógico que su actuación sea relevante para producir el daño, ya que de acuerdo a lo declarado por la demandante, el daño proviene de la decisión de mantener su inversión en acciones de La Polar fundada en los informes de PwC, ya que de haber operado éste de acuerdo a sus deberes legales, hubiese detectado las irregularidades denunciadas.



**Foja: 1**

evitando la generación de los daños que reclama. Adicionalmente, fueron las propias conductas de la demandante las que contribuyeron a la producción del perjuicio que alega: ya que incumplió con el nivel de diligencia que le impone la ley en su calidad de inversionista experta y de administradora de dineros ajenos. El objetivo de la responsabilidad civil es restituir a la víctima al estado anterior al hecho ilícito, y siendo los datos proporcionados por la demanda arbitrarios, no pueden dar lugar a la existencia de perjuicios ciertos y determinados. El ejercicio de determinación de los perjuicios que plantea la demandante no cumple con los requisitos, porque supone que las acciones de La Polar se habrían mantenido en su valor al día 8 de junio de 2011 o habrían subido su precio, ello por cuanto en el valor de las acciones (sobre todo de las empresas de este tipo) influyen una serie de factores que la demanda no incorpora en su análisis. Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicita el rechazo de la demanda deducida en su contra, con costas.

Que a fojas 600 (657), **rola contestación del demandado Julián Moreno**. Como primer argumento expone que frente al caso “La Polar” no existe pronunciamiento judicial alguno que establezca su responsabilidad en los hechos que señala el demandante. Hace presente que su parte ha tomado distancia de todos aquellos que han sostenido su falta de conocimiento sobre las repactaciones unilaterales en el caso La Polar, en efecto, reconoció la práctica de las renegociaciones unilaterales desde su primera declaración en la misma, así como el conocimiento generalizado que existía de ellas en Empresas La Polar S.A. También sostiene que las infracciones a la Ley de Mercado de Valores no se configuran por las repactaciones unilaterales, sino que por la información que se entregaba de ellas al mercado y los reguladores a través de las provisiones de incobrabilidad de los créditos de la cartera, principalmente, en las FECU trimestrales y los estados financieros de la compañía. El cálculo de las provisiones de la compañía era realizado en abierta infracción a lo dispuesto por la circular N° 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para las tarjetas de créditos no bancarias. Tanto el cálculo de provisiones como su aprobación, eran realizadas por sujetos que tenían plena conciencia del real estado de la cartera de créditos de la compañía



**Foja: 1**

sin requerir contribución alguna del demandado para ello. Se encuentra acreditado además, que el cálculo de las provisiones y la confección de la contabilidad y estados financieros de la compañía eran responsabilidad exclusiva y excluyente de personas que no eran ni su representada ni De Pablo, ni eran supervisados por él, tales responsabilidades se encontraban radicadas en terceras personas que ejercían control funcional respecto de las actuaciones de su parte al interior de la compañía, hechos acreditados en la investigación del Ministerio Público. Señala que para la demandante, la responsabilidad de todos los demandados surgiría, no por las repactaciones unilaterales sino que por haber proporcionado información falsa al mercado respecto de la real situación financiera de La Polar, hechos que, en caso alguno son de su responsabilidad. La demandante omite en sus consideraciones la responsabilidad que le cabe en los hechos a los ex directores de La Polar: Andrés Ibáñez Tardel, Fernando Franke, Baltazar Sánchez Guzmán, Heriberto Urzúa Sánchez, Raúl Sotomayor Valenzuela, Norberto Morita, Jacques Louis de Montalembert, María Gracia Cariola Cubillos, Raúl Cortázar Sáenz y Manuel Francisco Gana Eguiguren, quienes fueron sancionados por infracciones a las normas establecidas en el artículo 41 en relación con los artículos 39 y 59 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante las resoluciones exentas N° 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080. Finalmente, indica que la opinión manifestada por la SVS en la resolución N° 084 de fecha 9 de marzo de 2012, que lo sanciona y supuestamente le atribuye responsabilidad por supuestos perjuicios sufridos por la demandante, se encuentra controvertida en el procedimiento Rol N° 7521-2012, tramitado ante el 12° Juzgado Civil de Santiago. El proceso penal RIT 6930-2011 del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, dirimirá la falta o existencia de responsabilidad de quienes sean llevados a juicio en dicho caso. La veracidad y corrección jurídica de la resolución administrativa en que funda la demanda se encuentra bajo la competencia de otros tribunales. Su trayectoria en La Polar se inició en el año 1994, con el cargo de Gerente de Administración y Finanzas. En el año 1998 empresa se vio enfrentada a la crisis asiática, que tuvo como consecuencia un alza pronunciada en las tasas de interés, una fuerte inflación y un alto desempleo, afectando todo ello al segmento objetivo de La Polar: la clase



**Foja: 1**

media y media baja del país. La banca reaccionó disminuyendo y cerrando las líneas de crédito y el acceso al crédito a la compañía, entrando en una situación de cesación de pagos. Los esfuerzos de quienes en aquella época dirigían la compañía se enmarcaron en establecer y diseñar un proceso de negociación y acuerdo con los acreedores y la banca, que estuvo a cargo de Miguel Meyer y con su participación en cada una de sus etapas, lográndose un convenio judicial preventivo con los acreedores. Su rol como Gerente de Administración y Finanzas se prolongó hasta el 31 de diciembre de 1998, momento en el que se terminaron de firmar las escrituras de los acuerdos adoptados por los nuevos socios, con la banca, acreedores y antiguos propietarios. Expone que sin perjuicio del arribo de un inversionista extranjero, que inyectó nuevos capitales a la empresa dada la crisis que estaba viviendo, su compromiso estuvo con la empresa, frente a una solicitud de quiebra solicitada por un acreedor que había rechazado el convenio judicial preventivo aprobado, pagando con fondos propios el monto de la acreencia que estaba generando la quiebra. En 1999, siguió colaborando con la nueva administración, trabajando en la reestructuración de la empresa y la implementación de sistemas de administración. Asume el cargo de Gerente de Finanzas y Productos Financieros, pasando la Gerencia de Administración, a María Isabel Farah, quedando a su cargo las áreas de auditoría, métodos, control de cartera y control de gestión, contabilidad, legal, recursos humanos y planificación. A la Gerencia de Administración se le dotó de organismos de control independientes de la gestión de finanzas y créditos, a cargo de controlar y contabilizar todos los procesos de las áreas de negocios. Tenía bajo su responsabilidad el financiamiento de la compañía y la administración del negocio de las tarjetas de crédito. El rol del gerente de finanzas, era procurar el financiamiento de la compañía; en el área de productos financieros, debía desarrollar el corretaje de seguros, incrementar el uso de la tarjeta de crédito, y mantener un equipo de cobranzas que permitiera mantener la recaudación esperada y la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar. Al 2005, Julián Morer tiene a su cargo cinco gerencias, integradas por más de 500 personas. El área de cobranzas se estructuraba como una subgerencia a cuya cabeza encontraba un Subgerente de Cobranza, la cual se organizaba con



**Foja: 1**

Supervisor de call center, bajo el cual existían dos supervisores junior que administraban aproximadamente a 137 telefonistas, más personal. El área de call center administraba las campañas de cobranza telefónica a través de un sistema denominado Mosaix, un discador predictivo que permitía realizar muchas llamadas sin que se pierdan las llamadas en espera.

En cuanto a la relación de la gerencia corporativa de productos financieros con las gerencias y subgerencias subordinadas, explica que no solía dar instrucciones a personas distintas de los gerentes y subgerentes que dependían directamente de él; y las relaciones con sus subordinados se establecían a través de las gerencias o subgerencias respectivas, siendo un trabajo caracterizado por la autonomía y la delegación. Se celebraban pocas y cortas reuniones físicas orientadas al análisis numérico, y se llegaba a bastantes acuerdos telefónicos, lo cual redundaba en la existencia de gerencias y subgerencias con bastante independencia. Consecuente con lo anterior, la Subgerencia de Cobranzas tenía metas de cobranza o recuperación por cumplir, que estaban dispuestas en el plan anual aprobado por el Directorio, que se concretaban en las metas mensuales administradas por la Gerencia de Administración y acordadas con la Gerencia General. Sus instrucciones consistían en que se diera cumplimiento a dichas metas, controlando el área de cobranza en cuanto a la calidad del servicio otorgado, lectura esporádica de la casilla “Contáctenos” de la página web de la compañía, recibía información desde el área de informática con los avances diarios y de la Gerencia de Control de Gestión, a través de los informes de gestión que demostraban los volúmenes de colocaciones y recaudación. El avance de la cartera, se apreciaba por la confección de los denominados “Base Mayo”, enviados a gerentes y subgerentes dependientes de su área y, a la Gerencia de Control de Gestión y a Mariela Díaz Bahamondes, dependientes de la Gerencia de Administración, siendo ésta última asistente directa de Farah. Agrega que nunca una política del área a su cargo fue aplicada sin ser sancionada por la Gerencia de Administración y la Gerencia General.

Señala que los gerentes corporativos se reunían diariamente almorzar con el Gerente General, había reuniones de avances todos



**Foja: 1**

lunes asistiendo todas las gerencias corporativas, salvo la de Administración. Se trataban temas de evolución de ventas del área comercial. En el año 2008, Pablo Alcalde le pide que no ventile temas de comportamiento de cartera en las reuniones, porque allí se trataban temas de índole comercial. Además de esas reuniones, tenía otras esporádicas con el Gerente General, en las que trataban temas de costos de la estructura del área, reorganizaciones de la misma, avance de la campaña de cobranza de los clientes, etc. La gerencia de productos financieros tenía control directo por parte de la Gerencia de Administración, con la que trataban los temas analizados con el Gerente General. La Gerencia de Administración imponía a la de Productos Financieros las metas que debía cumplir, que incluían la cobranza. Auditoría, a cargo de Mario Oliva, establecía los procedimientos y auditaba las áreas de créditos, de cobranza, captación de clientes, etc. y se relacionaba con la empresa auditora Price Waterhouse Coopers para efectos de dar cumplimiento a la circular 17 de la SBIF; además estaba a cargo de revisar que se cumplieran las políticas de cobranzas, revisando informes, con visitas físicas a las unidades, con acceso a todos los sistemas. El área de control de gestión, a cargo de Marta Bahamondes, elaboraba informes de evolución de riesgo y de ventas a crédito, información contenida en los informes de gestión (IDG) y de recaudación (IDR). En cuanto a la evolución del riesgo, éste se refiere a la cobrabilidad de la cartera, a cuyo respecto el área de control de gestión generaba indicadores que obtenían del sistema informático y que indicaban los niveles de morosidad, de colocación o préstamos, tanto para refinanciamientos y renegociaciones, como para nuevas operaciones, información que fluía desde la Gerencia de control de gestión a la Gerencia de Administración y Gerencia General. El área de control de caja, debía hacer las cuadraturas y controlar el cumplimiento de procesos, además, tenía a cargo la recepción de reclamos de clientes y la relación con el Sernac, la operación de la “Línea Directa” y “*Contáctenos*”, entre otras. La unidad de procesos y métodos era encargada de levantar las políticas directamente con las gerencias involucradas para la ulterior aprobación de los niveles superiores de la compañía. La Gerencia Corporativa de informática y logística, estaba a cargo de Pablo Fuenzalida, que proveía a la Gerencia de Productos Financieros el soporte para





**Foja: 1**

desarrollos de los cambios de los procesos de crédito, de cobranza, de captación y para el sistema de administración de los tipos de seguros. Su parte le solicitaba informes que tenían por objeto controlar la gestión de cobranza y hacerla eficiente. Dicha gerencia manejaba toda la información de la compañía. Expone de política de créditos y de renegociación de La Polar, haciendo presente que la empresa siempre se dirigió a los segmentos socioeconómicos con ingresos entre \$200.000 y \$600.000 mensuales, por tanto, los cupos de crédito debían ser acordes a ese nivel. Sin embargo, para satisfacer las necesidades de esos clientes, aumentó el cupo que tenían, ajustándolo a un mayor plazo de colocación para que pudieran acceder a cualquier artículo que hubiere en la tienda. Para hacer frente a la rigidez de la tarjeta de La Polar, se habían generado productos orientados a la flexibilización del pago de los créditos a través de la modificación del flujo de pago, vía otorgamiento de un nuevo crédito, renegociación y refinanciamiento. El sistema de crédito de La Polar es en cuotas, por lo que si un cliente quiere cambiar una condición de pago, la única forma de hacerlo es mediante un nuevo crédito; refinanciamiento para aquellos créditos que presentan más de 90 días de atraso; y, repactación para clientes en mora con menos de 90 días de atraso. Para poder acceder el cliente debía tener contacto con la compañía, presencial o telefónico; pagar un pie equivalente a un 7,5% de la deuda o equivalente a la próxima cuota. Las excepciones consistían en un menor pie o en el no pago del mismo, siempre que se hubiese realizado un abono antes de los 30 días de solicitada la operación, y en forma muy limitada, renegociación sin pie y sin abono. Hace presente que desde el 2006 quería disminuir las renegociaciones y privilegiar el cobro efectivo.

En el año 2008, se desató una crisis que produce una alta inflación y cesantía, decae la construcción y, en general la actividad económica del país, afectando a La Polar, que en ese entonces efectuaba cerca de un 67% de las ventas a través de tarjeta de crédito. Por ello, restringen el acceso a créditos y a cupos adicionales, bajan la captación de clientes nuevos reducen plazos en los nuevos préstamos, y flexibilizan la política cobranza. La recaudación en efectivo no crecía tanto como la cartera, por lo que las cuentas por cobrar aumentaban. La situación no mejoraba, significand



**Foja: 1**

dos cosas: o estaba aumentando la morosidad o el volumen de renegociaciones, situación preocupante por estar fuera de los planes presupuestarios. Decidió formar un comité con todas las gerencias de su área, más Iván Dinamarca, quien asume funciones en el proyecto de apertura de operaciones en Colombia, para aumentar la tasa de pagos. Presiona para cobrar judicialmente, pero se le explica que la política de la empresa era “acompañar al cliente”, siendo incompatible con dichos procedimientos. En cuanto al descubrimiento de las renegociaciones sin contacto, explica que al revisar la línea de contáctenos de la empresa, se da cuenta que existían reclamos de clientes por renegociaciones sin contacto. Dicha información era manejada por la unidad de control de cartera, y estaba incompleta. La información del sistema era obtenida del archivo maestro de clientes, donde quedaban registrados los movimientos de clientes, resguardos y medidas de seguridad exigidos por autoridades y auditores externos para cubrir el riesgo operacional de la compañía. La información estaba a disposición de todos y se incluía si un cliente era renegociado o no, por lo que la afirmación de los otros demandados en cuanto a que se ocultó “el número de clientes renegociados”, es falsa, pese a no poder determinar la cantidad de clientes ni montos que podían estar involucrados. Sin perjuicio de ello, informa de lo anterior a la Gerencia de Administración y a la General. El Gerente General le pide manejar el problema en atención a la situación económica del país y su efecto en los clientes. Para buscar una solución, solicita al área de informática el desarrollo de una aplicación computacional que le informara la cantidad de clientes que no habían efectuado pagos reales en los últimos 6 meses y hasta un año; que no habían tenido pagos reales entre los últimos 360 días y dos años; y los que no habían tenido pagos reales desde hace más de dos años, independiente de la morosidad. De dicho análisis surge la clasificación en colores de la cartera. El encargado del área donde se producía la anomalía reconoció que se estaban realizando renegociaciones en línea, afirmando inicialmente que fueron con contacto. El problema se genera por los incentivos en el personal de call center, proporcionales al porcentaje de normalización. Se intensifican las acciones de cobranza de cartera en los colores, pero era tan grande, que no había posibilidad de abordarla



**Foja: 1**

forma inmediata, asimismo, se instruyó al abogado de la compañía a no efectuar cobranzas judiciales. A comienzos del 2010 se forma un nuevo comité para abordar el problema de la cartera aislada, cuyo objetivo era lograr que los clientes sin costumbre de pago, lo hicieran. En marzo de 2011, María Isabel Farah le comentó que había generado un plan el cual, al cabo de dos años se absorbería la cartera sub provisionada, con resultados débiles pero positivos para el 2011 y 2012, y resultados históricos en el 2015, apoyado en el negocio de Colombia y de las nuevas tiendas, que sería aprobado por el Directorio, y siempre confiando en que podrían lograrse.

En noviembre de 2009 se les informa que Sernac solicitaba copia de los contratos de adhesión. En marzo de 2010, asesorados por un estudio jurídico, se redacta la respuesta al Sernac, que confirmaba que La Polar obraba dentro de la ley, ya que la repactación unilateral estaba permitida por el mandato y por el contrato de línea de crédito. Dicha respuesta no fue firmada por el Gerente General, por lo que el área legal le solicita que firme la carta, accediendo en cuanto entendió que la respuesta se enmarcaba dentro de la legalidad vigente. El 7 junio de 2010, le envían una presentación sobre reclamos del Sernac, que reenvía al Gerente corporativo comercial Martín González. En noviembre del 2010, Sernac plantea el incremento de reclamos por renegociaciones unilaterales. Hace presente que no participó en ninguna reunión con el Sernac ya que no formaba parte de su función. Se llegó a un acuerdo con mediación colectiva, consistente en retrotraer los créditos hasta la fecha del último pago real, aplicándoles la tasa de interés máxima convencional, para luego a ese monto, descontar el 50% de intereses si el pago era en efectivo, un 30% si era a plazo, dependiendo de la nueva repactación. Adicionalmente se acordó entregar a los clientes una giftcard de dos mil pesos y la eliminación de sus antecedentes de Dicom. De esa mediación se solucionaron cerca de 80 de 200 casos. Firmó dicha mediación, pese a no ser su función y a no participar en ninguna reunión con el Sernac, siempre con el convencimiento de que actuaba legalmente.

Hace presente que no cometió la infracción del artículo 59 a) de Ley 18.045, por los hechos demandados, ya que no entregó informac



**Foja: 1**

falsa a algunos de los destinatarios, no realizó acto que genere responsabilidad por los supuestos perjuicios sufridos por la demandante. No fue usuario ni nunca se le asignó una clave para operar en el sistema, tampoco intervino en el cálculo de las provisiones ni en la preparación de los estados financieros que fueron comunicados a los destinatarios, y no participó en su elaboración. La señora Farah, y el personal a su cargo, eran quienes valoraban los activos de la compañía y le presentaban esa información al directorio, que debía aprobarla y remitirla a la SVS. La práctica de las renegociaciones unilaterales no era oculta, estaba en el sistema de información de La Polar. El demandante reconoce que Farah omitió un correcto cálculo de las provisiones, aún en pleno conocimiento de la práctica de las repactaciones unilaterales. El número de renegociaciones, el carácter de éstas, y la tasa de pago real, son elementos más que suficientes de acuerdo a la Circular 17 de la SBIF para provisionar adecuadamente la cartera de cuentas por cobrar. La información le era remitida periódicamente a la única persona encargada de realizar dichas provisiones, María Isabel Farah. Los sistemas de La Polar, si daban cuenta de la existencia de repactaciones unilaterales, y estaban en conocimiento gran parte de las gerencias de la compañía. La gerencia corporativa de administración era la unidad encargada de reportar a la gerencia general y al directorio de Empresas La Polar S.A. toda práctica crediticia realizada al margen de la política de la compañía. Agrega que no existe ningún antecedente escrito que dé cuenta de órdenes de repactar unilateralmente por su parte antes del año 2008, año a partir del cual sí hay constancia de ello.

De lo anterior establece la falta de concurrencia de los requisitos de la responsabilidad civil a su respecto. En cuanto a la falta de culpabilidad o ilícito extracontractual, señala que los supuestos perjuicios que reclaman su indemnización, consiste en la entrega de información falsa al mercado o público en general respecto de la real situación financiera de la compañía, conducta que no se le puede atribuir. Los daños o perjuicios producidos los Fondos de Inversión, no derivan causalmente de la práctica de renegociaciones unilaterales, no solo porque dicha práctica carece potencial suficiente para producir un perjuicio estimable a dichas entidades



Foja: 1

sino porque el hecho esencial del cual se derivan los supuestos daños, aparece determinado por la entrega de información falsa al mercado, relativa al real riesgo de incobrabilidad de la cartera crediticia de empresas La Polar derivada, a su vez, del déficit en el cálculo de las provisiones de la compañía, a cargo de la gerencia de administración encabezada por doña María Isabel Farah. Agrega la falta de causalidad, porque las repactaciones unilaterales no se derivan ni natural ni normativamente del daño acusado, pues éste se debe atribuir causalmente a la falta de provisiones y posterior entrega de información falsa al mercado o público en general. El daño debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación, e incluso si se existiera un vínculo, el daño no puede sino estimarse como consecuencia indirecta de los hechos que se le imputan, quedando en consecuencia excluido de conformidad a las reglas generales. Respecto a la culpa o hecho de la “víctima”, señala que el artículo 2331 del Código Civil, dispone que, corresponde moderar la responsabilidad para el caso en que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño, ya que pese al conocimiento de la demandante, igual realizó inversiones en la compañía. Señala que para que el perjuicio sea indemnizable debe ser cierto, lícito o legítimo y directo, perjuicio que en los términos pedidos por la demandante carece de dichas características. La ilicitud del aprovechamiento económico de un fraude lo establece el artículo 2316 inciso segundo del Código Civil. Además el daño no es directo, ya que debe ser una consecuencia directa de la acción imputada como hecho dañoso. Por lo anteriormente dicho es que solicita se rechace la demanda deducida en su contra en todas sus partes.

A fojas 662 (720), se llevó a efecto la audiencia de estilo con la asistencia del demandante y sus apoderados, y de los demandados don Pablo Alcalde Saavedra y Julián Moreno, junto a sus apoderados respectivamente. Se tuvo por contestada la demanda respecto a los demandados y llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

A fojas 2476, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

#### **I.- EN CUANTO A LOS EJECUTIVOS DEMANDADOS:**



**PRIMERO.-** Que, comparece **MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**, hoy **Moneda S.A. Administradora General de Fondos**, en representación de los Fondos **Pionero Fondo de Inversión**, **Moneda Chile Fund Ltd**, **Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión**, **Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión** y **Campion Fondo de Inversión Privado**, interponiendo demanda de responsabilidad extracontractual en contra de don **PABLO ALCALDE SAAVEDRA**, don **JULIÁN MORENO DE PABLO**, doña **MARÍA ISABEL FARAH SILVA**, don **NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN**, don **PABLO JORGE FUENZALIDA MAY**, don **MARTÍN GONZALEZ IAKL** y don **SANTIAGO GRAGE DÍAZ**, a causa de su participación en el denominado caso La Polar.

En general, se les imputa, desde sus distintas funciones o cargos en La Polar, haber actuado con culpa o dolosamente o incurriendo en un ardid, consistente en efectuar repactaciones unilaterales de los clientes morosos de dicha compañía, con la cual se hacía figurar dicha cartera como vigente en vez de darle el tratamiento de cartera morosa o “castigada”. Se les atribuye asimismo a tales sujetos pasivos, el hecho de falsear la realidad financiera de La Polar y entregar al mercado y al público en general información falsa. Se estiman infringidos por los demandados los literales a y f del artículo 59 de la Ley de Mercados de Valores, el artículo 42 N° 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al artículo 133 del mismo cuerpo legal y el 55 de la Ley de Mercado de Valores, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

Los detrimentos que se demandan se fundan en que al 08 de junio de 2011, los fondos que administraría **MONEDA S.A.** habrían sido titulares de 13.108.076 acciones de La Polar, que equivaldría a \$30.607.259.129; y que tras la publicación del hecho esencial de La Polar de 09 de junio de 2011, que habría informado de prácticas irregulares en la compañía, generó un periodo de incertidumbre, que se mantuvo hasta el 30 de noviembre de 2011, fecha esta última en que los inversionistas habrían tenido información veraz de La Polar para adoptar decisiones de inversión.



Foja: 1

En virtud de lo anterior afirma que su inversión en La Polar al **30 de noviembre de 2011**, ascendería a **\$4.797.067.410** por 12.908.876 acciones, lo que generaría una pérdida a tal fecha de **\$25.343.221.718**. Agrega que el Fondo Champion enajenó todas sus acciones durante el mes de septiembre de 2011, lo que le habría ocasionado una pérdida de **\$387.446.445**.

En cuanto a la relación de causalidad refiere que de haber actuado los demandados ejecutivos principales de La Polar conforme a la Ley y de manera diligente, no se habrían ocasionado los perjuicios. Agrega que **MONEDA** funda sus decisiones de inversión en la información pública y oficial de las empresas emisoras de valores entregan a los organismos regulatorios y al mercado. Terminan solicitando se condene a los demandados solidariamente a pagar el equivalente en pesos de **UF 61.856** para Moneda Small Cap Latinoamérica; UF 994.019 para el “*fondo de inversión Pionero*”; UF 71.765 para Moneda Chile Fund Ltd.; UF 13.257 para Moneda Renta Variable Chile y UF 17.777 para Fondo de Inversión Champion.

**SEGUNDO.-** Que, **PABLO FUENZALIDA MAY**, en su contestación, efectúa una reseña de su labor en La Polar, luego hace referencia a la sanción que le impuso la SVS y los alcances que dicho demandado le atribuye; afirma que ésta fue reclamada judicialmente causa Rol C-8054-2012 seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago. Posteriormente afirma no haber infringido el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, fundamentalmente por no haber incurrido en su concepto en “*malicia*”, sin negar la renegociación automática, afirmando que se trataba de una “*cuestión usual*”, tratándose de “*actos jurídicos válidos, puesto que ninguna sentencia dictada por un órgano jurisdiccional ha declarado su nulidad...*”. Niega además haber infringido el artículo 165 del mismo cuerpo legal, por no haber tenido acceso a “*información privilegiada acerca de la real situación financiera de Empresas La Polar S.A.*” y justifica “*las decisiones de venta de mis acciones en La Polar*” para diversificar sus inversiones.

Agrega que sus actuaciones habrían sido “**VALIDADAS POR LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA MEDIANTE**



Foja: 1

*DECLARACIÓN JURISDICCIONAL CON AUTORIDAD DE COSA JUZGADA*”, que sustenta en un juicio laboral por despido injustificado y cobro de prestaciones, que se tramitó ante el 2º Juzgado del Trabajo de Santiago, que habría sido sentenciado en su favor, estableciéndose en su parecer que *“el suscrito no tuvo relación alguna con las renegociaciones automáticas y menos con el cálculo de las provisiones de la compañía...”*. Invoca el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

Acto seguido, niega haber infringido sus deberes como gerente de La Polar estatuidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

En lo concerniente al daño que se reclama, sostiene que *“el daño sólo se produce una vez que se enajenan las acciones, lo que a la fecha no ha ocurrido, con excepción del Fondo Campion”*. Controvierte la relación de causalidad que se le atribuye.

Opone además la excepción de prescripción respecto de todos sus actos anteriores al 30 de enero de 2011, conforme al artículo 2332 del Código Civil. Pide finalmente sea desestimada la demanda en su contra, con costas.

**TERCERO.-** Que, **NICOLÁS RAMIREZ CARDOEN** procede a contestar la demanda interpuesta en su contra solicitando su rechazo, con costas. En lo sustantivo, sostiene que el método de cálculo del *“daño”*, está mal planteado, por no considerar *“la fecha de la adquisición respectiva y calcularlo a esa data.”*. Abunda al respecto señalando que la demanda no precisa fechas exactas ni precios de adquisiciones, respecto de cada fondo que administra.

Luego efectúa una extensa explicación que conducen a dicho demandado a afirmar que *“no conoció las maniobras fraudulentas en cuestión, de modo que no incurrió en ninguna de las conductas que se le imputan en la demanda, no incurrió ni en dolo, ni en culpa, y es víctima de los hechos”*.

**CUARTO.-** Que, don **PABLO ALCALDE SAAVEDRA** contestó la demanda sosteniendo primeramente que la demandante no cumple con requisito establecido en el artículo 133 bis de la Ley 18.046. Reitera **MONEDA** no cumple con los requisitos del artículo 17 de la Ley 20.727, norma que le otorgaría legitimación activa.





Foja: 1

Agrega que es la propia demandante la primera responsable por los daños o perjuicios sufridos por los fondos. A su vez, afirma que los reproches que se formulan a **PWC** por no haber analizado correcta y diligentemente la información disponible de La Polar, son predicables para la propia demandante; es decir, **MONEDA** sería responsable por sus propios actos, de todo eventual perjuicio.

Posteriormente alega que el libelo de demanda es inepto, ya que no presentaría una descripción suficiente de los hechos que se le imputan al señor **ALCALDE** y de los demás requisitos de la responsabilidad civil. Asimismo postula la improcedencia de la solidaridad esgrimida por la actora, por cuanto los hechos imputados no se derivarían de un mismo hecho.

En cuanto a la sentencia criminal dictada en su contra, agrega que la misma no determina su responsabilidad civil. Niega asimismo la relación de causalidad que se le atribuye, afirmando que su participación estuvo subordinada a la negligencia de **PWC**, interviniendo así en el curso causal de los hechos.

Refiere la inexistencia de perjuicios jurídicamente indemnizables, en cuanto Empresas La Polar S.A. ya habría interpuesto una demanda por los “*supuestos perjuicios que habría sufrido la compañía a raíz de los mismos hechos*”, por lo que de acogerse esta demanda existiría un enriquecimiento sin causa. Además, refiere que los perjuicios no serían ciertos ni determinados. Concluye pidiendo se rechace la demanda, con costas.

**QUINTO.-** Que, don **JULIÁN MORENO DE PABLO** contestó la demanda interpuesta en su contra, solicitando su íntegro rechazo, con costas. Al efecto, se extiende sobre la labor que desempeñó en La Polar desde el año 1994; afirma que no estuvo en situación de infringir el artículo 59 a) de la Ley 18.045; que las renegociaciones unilaterales no eran ocultas al interior de La Polar y que no concurrirían los requisitos para establecer su responsabilidad civil. En particular, alega la falta de causalidad, la culpa de la víctima por haberse expuesto imprudentemente al daño y la falta de perjuicios indemnizables. Sobre este último aspecto, expone adicionalmente que los daños que se demandan serían ilegítimos, en tanto “*el valor de la acción al día 8 de junio de 2011 no da cuenta sino de un fraude y,*”



Foja: 1

*consecuencia, no puede pretender la demandante aprovechar tal circunstancia” e indirectos.*

**SEXTO.-** Que, los demandados **MARÍA ISABEL FARAH SILVA, MARTÍN ANDRÉS GONZÁLEZ IAKL Y SANTIAGO GRAGE DÍAZ** no contestaron la demanda interpuesta en su contra, por lo que se ha producido lo que la doctrina denomina contestación ficta de la misma, que importa la negación íntegra de los presupuestos fácticos y jurídicos de la acción deducida por la parte demandante.

**SÉPTIMO.-** Que, a fojas 602, se dejaron para definitiva las excepciones dilatorias opuestas por los demandados don **PABLO ALCALDE SAAVEDRA** (fojas 270 y 314) y **JULIAN MORENO DE PABLO** (fojas 359), por lo que procede avocarse a su resolución.

Respecto de la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por **PABLO ALCALDE**, que se funda en que los reglamentos internos de los fondos que administraría la actora **MONEDA S.A.**, no establecerían los mecanismos, formas y plazos en virtud de los cuales las eventuales indemnizaciones serán enteradas en los fondos, ésta será desestimada por no tratarse de una materia que conduzca a la falta de legitimación, sino eventualmente a la manera en que serán enteradas las eventuales indemnizaciones, aspecto que en nada altera el derecho a accionar y la legitimación, y que compete en definitiva al régimen interno de cada uno de los fondos.

A su vez, en cuanto a la litis pendencia “*por conexidad*” que propone el mismo demandado, también será rechazada por no ser asimilables los hechos asentados en sede administrativa por la SVS -reclamados jurisdiccionalmente- con aquellos que se discuten en este juicio de responsabilidad extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, estima esta sentenciadora que no concurre la triple identidad que exige el legislador y tampoco una conexidad necesaria y directa entre el litigio invocado por el incidentista y lo que pueda resolverse en autos.

La misma incidencia interpone el demandado **JULIAN MORENO DE PABLO** fundada en la existencia de una reclamación de multa impuesta por la SVS que se tramita ante el 12º Juzgado Civil de Santiago causa Rol Nº 7521-2012 y en la causa criminal RIT 6930-2011.



Foja: 1

excepción dilatoria será rechazada por idénticos fundamentos a los expuestos en lo que antecede, a lo que cabe agregar que la referida causa penal fue motivo de la suspensión decretada a **fojas 684** hasta la terminación del proceso criminal, situación esta última que ya se produjo.

Las referidas excepciones son en consecuencia desestimadas, sin costas, por estimar que tuvieron motivo plausible.

**OCTAVO.-** Que, corresponde a su vez pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada interpuesta por **PABLO FUENZALIDA MAY**, fundada en la existencia de un juicio laboral, RIT O-3066-2011.

Dicha alegación será rechazada en consideración a la naturaleza y finalidad de dicho contencioso, que es diversa a este juicio de responsabilidad extracontractual respecto del cual no ha existido un pronunciamiento previo, sin perjuicio que no concurre la triple identidad que exige el legislador y tampoco dicho demandado acompañó al proceso las decisiones jurisdiccionales que invocó en su favor.

En lo concerniente a la prescripción que alega este mismo demandado, también será rechazada en consideración a que el fraude de La Polar se hizo público el 9 de junio de 2011; fecha desde la cual la actora recién estuvo en condiciones de interponer su acción, tanto por el carácter oculto del ilícito, como por que el daño reclamado -efectivo o no- se habría comenzado a producir desde tal data, no habiendo transcurrido en consecuencia, el plazo legal para que prescribieran sus derechos, de acuerdo al **artículo 2332 del Código Civil**.

Respecto de la alegación del demandado **PABLO ALCALDE SAAVEDRA** que se hace radicar en el incumplimiento de los requisitos del **artículo 17 de la Ley 20.712**, la misma fue motivo de una excepción dilatoria, por lo que no cabe su reiteración ni un nuevo pronunciamiento sobre el particular. Postula asimismo dicho demandado que **MONEDA** no cumpliría con los requisitos del **artículo 133 bis de la Ley de Sociedad Anónima**, defensa que es rechazada teniendo únicamente en consideración que la demandante no ha ejercido la acción que contempla dicha norma tampoco ha reclamado un perjuicio en favor de Empresas La Polar S.A.

**NOVENO.-** Que, en cuanto al primer requisito de la responsabilidad ejercida en autos, esto es, la existencia de un hecho doloso o culpable,



Foja: 1

imputables a los demandados ex ejecutivos principales de La Polar, debe tenerse en especial consideración que a **fojas 2466**, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, remitió a este tribunal, “*copias integrales de las sentencias definitivas ejecutoriadas dictadas en la presente causa en contra de Pablo Alcalde Saavedra, Julián Moreno De Pablo y María Isabel Farah, de la sentencia dictada en causa RIT 11798-2014 en contra de Nicolás Ramírez Cardoen, y de la Sentencia dictada en causa RIT 14988-2014 en contra Pablo Fuenzalida May...* ”.

Del mérito de tales sentencias condenatorias, es posible constatar que establecieron los siguientes hechos, en relación con lo debatido en autos:

- a) Sentencia dictada en causa RIT 11798-2014 de 3 de septiembre de 2014:

“*En este contexto, y en el ejercicio de sus respectivas funciones, el imputado NICOLAS RAMIREZ, entre Noviembre del 2009 y Enero del 2011 por su parte, en conjunto con los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO, RAMÍREZ CARDOEN, GRAGE DÍAZ, GONZÁLEZ IAKL, FUENZALIDA MAY, BAHAMONDES ARRIAGADA y TAPIA VIDAL, realizaron de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones mediante las cuales cometieron consciente y voluntariamente los hechos típicos que a continuación se señalan y en las fechas que en cada caso se indican, o bien facilitaron consciente y voluntariamente los medios esenciales para que éstos se cometieran...*”.

“*Pues bien, en cumplimiento de la obligación de entrega trimestral y anual de información financiera que pesaba sobre “Empresas La Polar S.A.”, el imputado NICOLAS RAMIREZ, en conjunto con las otras personas antes señaladas, en sus respectivos periodos, realizó con aquellos de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones dirigidas a que se entregaran antecedentes o información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público en general. Para ello, contaron con la cooperación consciente y voluntaria de los imputados BAHAMONDES ARRIAGADA y TAPIA VIDAL. El imputado NICOLAS RAMIREZ, en el periodo que se desempeñó como gerente general de Empresas LA POLAR S.A. tuvo pleno conocimiento que*



Foja: 1

*información contable y financiera de la compañía, que era entregada a la SVS y al mercado, no reflejaba su real situación financiera, atendida la existencia de una práctica reiterada que había sido implementada en el seno de la Gerencia Corporativa de Productos Financieros de la empresa, que producía la alteración de la información financiero- contable que se generaba al interior de la misma, y que posteriormente era incorporada a los EEFF y entregada a la autoridad. Todo ello, gracias a las distintas actuaciones que se realizaban, tanto desde la Gerencia Corporativa de Administración, como desde la Gerencia General de la compañía desde antes que NICOLAS RAMIREZ asumiera en ese cargo.*

*Efectivamente, con anterioridad a que NICOLAS RAMIREZ asumiera en el cargo de gerente general, a lo menos desde el mes de enero del año 2006 y hasta el mes de junio del año 2011 existió al interior de “Empresas La Polar S.A.” una práctica reiterada y sistemática denominada, entre otras formas, “Normalización”, “Renegociación” o “Renegociación por sistema”. En virtud de esta práctica, un número cada vez más significativo de créditos correspondientes a clientes que se encontraban en mora pasaron a integrar la cartera de créditos vigentes de la empresa, esto es, de deudas al día, mediante la renegociación que de aquellos realizó unilateralmente la compañía, colocando al día la deuda y otorgando nuevos plazos para su pago, sin previo abono, consentimiento ni conocimiento de los clientes.*

*De acuerdo al hecho esencial de fecha 21 de marzo de 2012, informado por “Empresas La Polar S.A.” a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general, el universo de personas que habría sido afectado por renegociaciones unilaterales ascendería a 999.109 clientes. Hasta mediados del año 2009 la práctica de renegociaciones unilaterales fue realizada manualmente por los digitadores del Cali Center del Área de Cobranzas que operaban el sistema informático de la empresa, modificando los datos asociados a los créditos para los efectos de transformarlos en parte de la cartera de créditos vigentes de la compañía. A contar de mediados de ese año, y previo a que NICOLAS RAMIREZ asumió como gerente general, las renegociaciones comenzaron a realizarse en forma automática mediante la implementación de una herramienta informática que*



Foja: 1

*especialmente diseñada para ello. Todo lo anterior generó importantes efectos contables y financieros que se tradujeron en la falsedad de los montos de varias de las cuentas informadas en los EEFF, individuales y consolidados, sin perjuicio que el efecto que produjeron las renegociaciones unilaterales en la desfiguración y falseamiento de la información que fue presentada al mercado se aprecia en su real magnitud e integridad en los EEFF consolidados, por lo que adelante, cuando se haga mención a los “Estados Financieros” (EEFF) de la compañía, se estará aludiendo a la información financiera consolidada.*

*En efecto, esta práctica de “renegociaciones unilaterales” tuvo un efecto incremental directo en la determinación de la “Cartera de Créditos por Cobrar que integraba los EEFF que la empresa informaba, toda vez que permitió aumentar artificialmente el monto de dicha cartera, no sólo por los supuestos nuevos créditos vigentes que en ella eran contabilizados, que abultaban las “Cuentas de Ingresos y Egresos”, sino que, además, por la creación también artificial de gastos de cobranza, intereses por mora y administración de la cartera, e intereses devengados por esos nuevos créditos. Dicho efecto se ve reflejado en las cuentas contables “Cartera clientes crédito” e “Intereses no devengados cartera clientes crédito”.*

*Asimismo, la sustitución artificial de clientes que integraban la cartera en mora por clientes que pasaban a integrar la cartera de créditos vigentes, permitió también ocultar la real morosidad de los clientes y el real riesgo asociado a la cartera, en la medida que los montos que fueron rebajados de la referida “Cartera de Créditos por Cobrar por concepto de “Deterioro de Deudores Comerciales”, fueron menores a los reales. El efecto de las renegociaciones en el riesgo de crédito asociado a la cartera se vio reflejado en las cuentas contables “Provisión cartera clientes crédito”, “Provisión deudores incobrables Corpolar” y, a partir de la implementación de normas IFRS, en “IFRS Provisión cartera securitizada”.*

*Todo lo anterior terminó afectando la veracidad de los resultados de la compañía, en la medida que habiéndose incrementado artificialmen*

*tanto la “Cartera de Créditos por Cobrar” como el monto de los ingresos obtenidos por la sociedad, las utilidades que fueron informadas en referidos EEFF fueron también mayores que las reales, al no reconocerse*



Foja: 1

*descontarse el monto real de las provisiones, esto es, el verdadero porcentaje de riesgo de incobrabilidad de la cartera ni sus respectivos castigos... ”*

*“La información así falseada fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros, en el periodo que NICOLAS RAMIREZ se desempeñó como gerente general...”*

*“De la misma forma, en cumplimiento de la entrega de información periódica que asiste a toda sociedad anónima, la referida información falsa también fue entregada al mercado a través de su publicación en el portal de inversionistas del sitio web de “Empresa La Polar SA”, [www.lapolar.cl](http://www.lapolar.cl). Pues bien, estando en pleno conocimiento de la realización de las renegociaciones unilaterales y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de la empresa que se entregaba a la SVS y al mercado, el imputado NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN, con posterioridad al mes de noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como Gerente General de la compañía y hasta su renuncia en el mes de enero de 2011, presentó a la aprobación del Directorio, ahora presidido por ALCALDE SAAVEDRA, los EEFF que a consecuencia de las renegociaciones unilaterales contenían información financiera falsa. Asimismo, ocultó esta falsedad a los miembros del Directorio, y formuló las correspondientes e indispensables declaraciones de responsabilidad en su calidad de Gerente General de “Empresas La Polar S.A” acerca de la veracidad de la información que de esta manera era incorporada a las FECUS y EEFF trimestrales, semestrales y anuales de diciembre del 2009 a septiembre del 2010 y de la Memoria Anual del año 2009, para que así la empresa cumpliera con su obligación legal de entrega de información continua a la Superintendencia y al mercado, que en el caso particular resultaba ser falsa. Por otra parte, él mismo entregó directamente a la SVS información falaz, presentando la Memoria Anual correspondientes al año 2009...”*

*“El conocimiento que RAMÍREZ tenía de la realización de las referidas renegociaciones y de los efectos que las mismas producían en falseamiento de la información financiera de la empresa, provenía, entre otros medios, de los denominados informes de gestión o IDG que imputada MARTA BAHAMONDES ARRIAGADA, que había ingresado*



Foja: 1

*la compañía en marzo de 2006, y que estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión y Desarrollo, desde abril del año 2007 a junio del año 2011, excepto en el periodo comprendido entre noviembre del 2010 a enero del 2011, elaboraba periódicamente y que eran regularmente enviados, entre otros, al imputado NICOLÁS RAMÍREZ....”.*

*“Pues bien, en cumplimiento de esta obligación de entrega semestral y anual de información financiera que pesaba sobre SCG, el imputado RAMÍREZ CARDOEN en conjunto con otros imputados, en circunstancias que a la época de las respectivas imputaciones tuvo pleno conocimiento que la información contable y financiera de dicha sociedad que era entregada a la Superintendencia no reflejaba su real situación financiero-contable, atendida la existencia de una práctica reiterada de renegociación unilateral de los créditos, que producía la desfiguración de los EEFF y demás información financiera de SCG, efectuó, a sabiendas, de forma coordinada, reiterada y sistemática, una serie de declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la empresa, aprobó y presentó balances ideológicamente falsos y disimuló mediante la entrega de información financiera falsa la real situación patrimonial de SCG....”.*

*“En razón de lo anterior, y a partir de la conducta que, como se señalará, realizó cada imputado, la aprobación y envió que aquellos efectuaron a la SBIF de los EEFF, anuales y semestrales, y sus respectivas notas explicativas, además de la presentación de los informes de acreditación de capital y reservas y límites de endeudamiento de SCG con información distorsionada o falsa, implicó que en las fechas que a continuación se señalan, además de estar aprobando y presentado balances falsos, los imputados efectuaran declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la sociedad y disimularan la real situación financiera de la empresa en todos estos antecedentes financieros...”*

En lo dispositivo se condenó a **NICOLAS RAMIREZ CARDOEN** en calidad de autor de los delitos reiterados de entrega de información maliciosamente al mercado y al público en general, a la Superintendencia de Valores y Seguros, previsto y sancionado en el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores; de uso deliberado de información privilegiada previsto y sancionado en el artículo 60 letra e) en relación al artículo 166





Foja: 1

la Ley de Mercado de Valores; de declaración maliciosamente falsa, en escritura de emisión de valores, en su prospecto de inscripción o en los antecedentes de solicitud de inscripción, previsto y sancionado en el artículo 59 letra f) de la Ley de Mercado de Valores; y de efectuar a sabiendas una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la empresa, o aprobar o presentar un balance adulterado o falso, o disimular su situación, previsto y sancionado en el artículo 157 de la Ley General de Bancos; todos en grado de consumados, condenándolo a la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo y accesorias.

b) Sentencia dictada en causa RIT 6930-2011 de 8 de diciembre de 2015:

*“En este contexto, y en el ejercicio de sus respectivas funciones, los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA y MORENO DE PABLO y los condenados RAMÍREZ CARDOEN y FUENZALIDA MAY realizaron de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones mediante las cuales cometieron consciente y voluntariamente los hechos que a continuación se señalan y en las fechas que en cada caso se indican, o bien facilitaron consciente y voluntariamente los medios esenciales para que éstos se cometieran, ilícitos a través de los cuales afectaron gravemente al mercado, a la banca, a sus accionistas, a los inversionistas, al sistema económico en general y la administración de justicia...”*

*“Pues bien, en cumplimiento de la obligación de entrega trimestral y anual de información financiera que pesaba sobre “Empresas La Polar S.A.”, los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO, y los condenados RAMÍREZ CARDOEN y FUENZALIDA MAY, en sus respectivos periodos, realizaron de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones dirigidas a que se entregaran antecedentes o información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público en general. Todos los imputados aludidos precedentemente tuvieron pleno conocimiento que información contable y financiera de la compañía, que era entregada a SVS y al mercado, no reflejaba su real situación financiera, atendida la existencia de una práctica reiterada que había sido implementada en*



Foja: 1

*seno de la Gerencia Corporativa de Productos Financieros de la empresa, que producía la alteración de la información financiero-contable que se generaba al interior de la misma, y que posteriormente era incorporada a los EEFF y entregada a la autoridad. Todo ello, gracias a las distintas actuaciones que se realizaban, tanto desde la Gerencia Corporativa de Administración, como desde la Gerencia General de la compañía.”*

*“Efectivamente, a lo menos desde el mes de enero del año 2006 y hasta el mes de junio del año 2011 existió al interior de “Empresas La Polar S.A.” una práctica reiterada y sistemática denominada, entre otras formas, “Normalización”, “Renegociación” o “Renegociación por sistema”. En virtud de esta práctica, un número cada vez más significativo de créditos correspondientes a clientes que se encontraban en mora pasaron a integrar la cartera de créditos vigentes de la empresa, esto es, de deudas al día, mediante la renegociación que de aquellos realizó unilateralmente la compañía, colocando al día la deuda y otorgando nuevos plazos para su pago, sin previo abono, consentimiento ni conocimiento de los clientes.”.*

*“De acuerdo al hecho esencial de fecha 21 de marzo de 2012, informado por “Empresas La Polar S.A” a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general, el universo de personas que habría sido afectado por renegociaciones unilaterales ascendería a 999.109 clientes.”.*

*“Asimismo, la sustitución artificial de clientes que integraban la cartera en mora por clientes que pasaban a integrar la cartera de créditos vigentes, permitió también ocultar la real morosidad de los clientes y el real riesgo asociado a la cartera, en la medida que los montos que fueron rebajados de la referida “Cartera de Créditos por Cobrar” por concepto de “Deterioro de Deudores Comerciales”, fueron menores a los reales. El efecto de las renegociaciones en el riesgo de crédito asociado a la cartera se vio reflejado en las cuentas contables “Provisión cartera clientes crédito”, “Provisión deudores incobrables Corpolar” y, a partir de la implementación de normas IFRS, en “IFRS Provisión cartera securitizada.”*

*“Todo lo anterior terminó afectando la veracidad de los resultados de la compañía, en la medida que habiéndose incrementado artificialmente tanto la “Cartera de Créditos por Cobrar” como el monto de los ingresos obtenidos por la sociedad, las utilidades que fueron informadas en 9*



Foja: 1

*referidos EEFF fueron también mayores que las reales, al no reconocerse ni descontarse el monto real de las provisiones, esto es, el verdadero porcentaje de riesgo de incobrabilidad de la cartera ni sus respectivos castigos. Los efectos de estas renegociaciones en los resultados de la compañía se veían reflejados en las cuentas contables “Intereses devengados cartera de clientes”, Recuperación de gastos de cobranza”, “Intereses por mora”, “Ingresos por administración de cartera”, “Provisión incobrables”, “Indemnización cartera clientes”, “TFRS provisión deudores incobrables” y “Castigo capital deudores”.*

*“Asimismo, se presentaron a la Superintendencia de Valores y Seguros las Memorias Anuales de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 las que también contenían información contable y financiera falsa. Las fechas y condiciones de entrega de las referidas memorias son las siguientes...”.*

*“De la misma forma, en cumplimiento de la entrega de información periódica que asiste a toda sociedad anónima, la referida información falsa también fue entregada al mercado a través de su publicación en el portal de inversionistas del sitio web de “Empresa La Polar S.A.”, [www.lapolar.cl](http://www.lapolar.cl)”.*

*“Pues bien, estando en pleno conocimiento de la realización de las renegociaciones unilaterales y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de la empresa que se entregaba a la SVS y al mercado, el imputado PABLO ALCALDE SAAVEDRA quien, recibiendo bonos como consecuencia del buen desempeño que como ejecutivo reflejaban los exitosos pero falsos resultados de la empresa respaldó la realización de la práctica de renegociaciones unilaterales al interior de la Gerencia Corporativa de Productos Financieras a cargo de MORENO DE PABLO. Aquella práctica permitía alterar la información contable y financiera generada al interior de la compañía para los efectos de ocultar la real situación patrimonial que en esa época tenía “Empresas La Polar S.A.”, consintiendo, asimismo, en que la información financiera falsa, que a consecuencia de dicha práctica se iba generando interior de la empresa, fuera utilizada para elaborar los EEFF por parte la Gerencia Corporativa de Administración, a cargo de FARAH SILVA.*



Foja: 1

*“En el mismo sentido, ALCALDE SAAVEDRA en conjunto con FARAH SILVA y MORENO DE PABLO realizaron actos para efectos de mantener y mejorar la efectividad de estas prácticas irregulares. Asimismo no entregó esta información contable-financiera a los miembros del Directorio y prestó, entre los años 2009 y 2011, en su calidad de Presidente del Directorio, su indispensable aprobación para que los EEFF trimestrales y anuales de “Empresas la Polar S.A.” y las Memorias Anuales, que contenían información falsa, fueran entregados a la SVS y, a través de ella, al público en general. Por otra parte, presentó a la SVS las Memorias anuales correspondientes a los años 2006 a 2008, época en la que se desempeñó como Gerente General. Además, formuló las correspondientes e indispensables declaraciones de responsabilidad, tanto en calidad de Presidente del Directorio como de Gerente General de “Empresas La Polar S.A.”, concretamente respecto de las FECUs y EEFF trimestrales, semestrales y anuales de los años 2006 a 2009 y 2010 a 2011, respectivamente, y de las Memorias Anuales de los años 2006 a 2010. Tal declaración de responsabilidad decía relación con la veracidad de la información que era incorporada a las FECUs, Estados Financieros y Memorias, lo que era indispensable para que la empresa pudiera cumplir con su obligación legal de entregar información a la Superintendencia y al mercado, que en el caso particular resultaba ser falsa.”*

*“Por su parte, el imputado JULIÁN MORENO DE PABLO, Gerente Corporativo de Productos Financieros hasta junio del 2011, y quien en tal calidad recibió bonos como consecuencia de los exitosos pero falsos resultados de la empresa que eran informados al mercado, tuvo durante todo el periodo mencionado interés en los resultados de la compañía en su calidad de accionista, instruyó, desde el año 2006, la realización de las renegociaciones unilaterales. Dicha instrucción la impartió al equipo que integraba la Subgerencia de Cobranza que se encontraba bajo su dependencia. En una primera etapa, las renegociaciones unilaterales aludidas fueron realizadas manualmente, a través de los empleados del Área de Call Center, quienes en vez de contactar a los clientes para gestionar cobranzas de los créditos morosos, ingresaban las renegociaciones al sistema computacional de la compañía, transformando dichos créditos en vigentes*



RLRDRD5YM

Foja: 1

*En una segunda etapa, a contar de mayo del 2009, las renegociaciones se realizaron en forma automática, mediante la implementación de una aplicación informática desarrollada al interior de la Subgerencia de Informática, también a solicitud de MORENO DE PABLO. ”.*

*“Con ello, el imputado MORENO DE PABLO posibilitó la alteración de la información contable y financiera que se generaba al interior de la compañía, facilitando así la entrega de información falsa a la SVS y al mercado”.*

*“Pero además, la información falsa que era generada de esta forma por la gerencia a cargo de MORENO DE PABLO era utilizada por la Gerencia Corporativa de Administración a cargo de FARAHA SILVA, como base de cálculo de la provisión de incobrabilidad. De esta forma se lograba disminuir artificialmente el riesgo asociado a la cartera de la compañía, es decir, el monto de las provisiones que se incluía en los EEEF trimestrales y anuales que eran presentados por el Gerente General al Directorio de “Empresas La Polar S.A.” para su necesaria aprobación previo envío a la Superintendencia y, a través de ella, al mercado en general. ”*

*“A su turno, la imputada MARÍA ISABEL FARAHA SILVA, quien hasta junio del 2011 ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Administración de “Empresas La Polar S.A.”, recibiendo en tal calidad bonos como consecuencia de los exitosos pero falsos resultados de la empresa que eran entregados al mercado, y teniendo durante todo el periodo mencionado interés en los resultados de la compañía en su calidad de accionista, determinó y difundió falsos montos de provisiones en la compañía. Tales montos de provisiones estaban subvalorados y se explicaban por la omisión deliberada en su cálculo de la valoración del riesgo asociado a una importante cantidad de créditos que, figurando como vigentes, en realidad eran créditos morosos que habían sido renegociados unilateralmente por la compañía, situación conocida por la imputada desde el año 2006. FARAHA SILVA fijaba los falsos montos de provisiones sobre la base de la información que le entregaban las áreas a cargo de MORENO DE PABLO, previo ajuste de dicha información a las metas de provisión que ella misma determinaba. Los falsos montos de provisiones incluidos en los EEEF trimestrales y anuales, previa presentación*



Foja: 1

*Directorio de “Empresas La Polar S.A.” para su necesaria aprobación, y posteriormente entregados a la Superintendencia y, a través de ella, al mercado en general, conociendo los imputados que se trataba de información falsa.”.*

*“El Comité aludido, formado por el condenado RAMÍREZ CARDOEN, estuvo integrado además por personal de las Gerencias Corporativas de Productos Financieros, MORENO DE PABLO y el condenado FUENZALIDA MAY.”.*

*“Pues bien, en cumplimiento de esta obligación de entrega semestral y anual de información financiera que pesaba sobre SCG, los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAHA SILVA, MORENO DE PABLO y el condenado RAMÍREZ CARDOEN, en circunstancias que a la época de las respectivas imputaciones tuvieron pleno conocimiento que la información contable y financiera de dicha sociedad que era entregada a la Superintendencia no reflejaba su real situación financiero-contable, atendida la existencia de una práctica reiterada de renegociación unilateral de los créditos, que producía la desfiguración de los EEEF y demás información financiera de SCG, efectuaron, a sabiendas, de forma coordinada, reiterada y sistemática, una serie de declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la empresa, aprobaron y presentaron balances ideológicamente falsos y disimularon mediante la entrega de información financiera falsa la real situación patrimonial de SCG.”.*

*“Pues bien, estando en pleno conocimiento de los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior de “Empresas la Polar S.A.” y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de SCG, que de la forma antedicha era semestral y anualmente entregada a la SBIF, el imputado PABLO ALCALDE SAAVEDRA, prestó, en su calidad de Director de SCG, durante los años 2007 a 2011, su indispensable aprobación para que los EEEF semestrales y anuales de dicha empresa, que contenían balances y declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la sociedad, y que disimulaban la real situación financiera de la empresa, fueran entregados a la SBIF. Asimismo, firmó, como Gerente General de SCG, correspondientes cartas conductoras para los efectos de que pudieran ser*



Foja: 1

*enviados materialmente a dicha Superintendencia, con fecha 28 de febrero de 2007, los Estados Financieros y los Informes de acreditación de capital y reserva y límite de endeudamiento, conjuntamente con los formularios TC1 correspondientes al Ejercicio contable 2006, que eran exigidos por la normativa vigente.”*

*“Por su parte, el imputado JULIÁN MORENO DE PABLO, estando en pleno conocimiento de los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior de dicha compañía y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de SCG, que de la forma antedicha era semestral y anualmente entregada a la SBIF, firmó, en representación de SCG, como Gerente Corporativo de Productos Financieros, las correspondientes cartas conductoras para los efectos de que pudieran ser enviados materialmente a dicha Superintendencia, con fecha 31 de enero de 2008, el Estado Financiero anual y el Informe de acreditación de capital y reserva y límite de endeudamiento, correspondientes al Ejercicio Contable 2007, que eran exigidos por la normativa vigente.”*

*“A su turno, la imputada MARÍA ISABEL FARAH SILVA, estando también en pleno conocimiento de los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior de “Empresas la Polar S.A.” y de los efectos que la misma producía en el falseamiento de la información contable y financiera de SCG que de la forma antedicha era semestral y anualmente entregada a la SBIF, prestó en su calidad de Directora de la empresa SCG, durante los años 2007 a 2011, su indispensable aprobación para que los EEFF que contenían balances y declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la sociedad, con los que se disimulaba la real situación financiera de la empresa, fueran entregados a la SBIF. Asimismo, la imputada firmó, en representación de la misma sociedad como Gerente Corporativo de Administración, las correspondientes cartas conductoras, para los efectos de que pudieran ser enviados materialmente a dicha Superintendencia, con fecha 4 de agosto de 2008, 30 de enero de 2009 y 2 de enero de 2010, los Estados Financieros anuales correspondientes a los Ejercicios contables 2008 y 2009, y el Estado de situación semestral correspondiente al período contable junio 2008, y con fechas 31 de julio de*



Foja: 1

2007, 14 de enero de 2008, 30 de julio de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 31 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010 y 14 de enero de 2011, los Informes de acreditación de capital y reserva y límite de endeudamiento, conjuntamente con los Formularios TC1, correspondientes a los períodos contables de los respectivos semestres, de acuerdo con la normativa vigente.”

En definitiva, se tuvieron por acreditados los siguientes hechos en lo que interesa, los cuales fueron aceptados por los imputados:

“Que los imputados en forma conjunta procedieron a remitir información falsa a la Superintendencia de Valores en primer término bajo el formato FECUS luego bajo la modalidad EEFF( IFRS), en pleno conocimiento que tal información no reflejaba a cabalidad la verdadera situación financiera de La Polar , atendida la existencia de la practica reiterada de repactaciones unilaterales de clientes que se encontraban en mora incrementando así artificialmente los activos y, minusvalorando los pasivos, todos los cuales fueron informados por los imputados efectuando las correspondientes declaraciones de veracidad de la información allí contenida como verdadera. La coordinación y la información donde aparecían tales renegociaciones aparecía reflejada en los archivos llamado IDG financiero que tenía una hoja que señalaba renegociaciones por sistema. ”.

“Que la empresa la Polar podía emplear como forma de financiamiento la emisión de títulos de deuda. Dichas operaciones deben contener una escritura de emisión, un prospecto donde se describe el negocio incluyendo sus estados financieros y una declaración jurada de veracidad. En este contexto unos de los imputados (Alcalde) efectuó declaraciones falsas que no se ajustan a la realidad de la situación financiera de la empresa.”

“La sociedad inversiones SCG S.A era parte del Holding La Polar y en tal calidad fue autorizada la emisión de tarjetas de crédito procedió a entregar a la SBIF los estados financieros anuales, estado de situación semestral o archivo C31. En virtud de aquello procedieron a realizar serie de declaraciones falsas sobre el capital de la empresa, aprobaron





Foja: 1

*presentaron balances falsos falseando así la verdadera situación financiera de la empresa.”.*

*“De esta manera una vez que se efectuaba una renegociación unilateral ese crédito era traspasado a SCG a cambio de financiamiento que aquella supuestamente hacía de operaciones de crédito de La Polar pero con un mayor que el crédito moroso original originando asientos contables en SCG que produjeron falseamiento en sus estados financieros.”.*

En lo resolutivo absolvió a **PABLO ALCALDE SAAVEDRA, MARÍA ISABEL JAZMÍN FARAH SILVA** y **JULIÁN MORENO DE PABLO** como autores del delito de estafa, solicitada por los querellantes AFP Capital y AFP Cuprum.

Por otra parte, condenó a **PABLO ALCALDE SAAVEDRA** a la pena única de cinco años de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 UTM accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público durante el tiempo de condena, accesoria especial del artículo 61 bis de la ley de Mercado de Valores, esto es, inhabilitación especial de dos años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva sin costas como autor de los delitos reiterados de infracción al artículo 59 a) de la Ley de Mercado de valores, delito del artículo 27 a y b de la Ley 19.913 (lavado de dinero), infracción al artículo 59 f) de la Ley de Mercado de Valores, infracción al artículo 157 de la ley General de Bancos cometidos 28 de abril, 11 de agosto, 30 de octubre, de 2006; 28 de febrero, 30 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre, de 2007, 29 de febrero, 30 de abril, 13 de agosto, 29 de octubre, de 2008, 26 de febrero, 29 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre de 2009; 26 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y, 25 de noviembre todos del 2010, 17 de marzo, 29 de abril de 2011; 10 de abril de 2007, 11 de abril de 2008, 13 de abril de 2009, 12 de abril de 2010, 13 de abril de 2011 (primer ilícito); 25 de enero, 1 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 27 de junio, 30 de junio, 2 de mayo, 4 de julio de 2011 (segundo ilícito); 30 de agosto, 5 de septiembre, 2 de octubre, 3 de octubre 19 de octubre de 2007, 26 de marzo, 27 de marzo de 2009, 21 de octubre y 30 de noviembre de 2009.



**Foja: 1**

20 de mayo, 31 de mayo de 2011 (tercer ilícito); 28 de febrero de 2007, 31 de enero de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de enero de 2011, 28 de febrero de 2007, 8 de abril de 2008, 4 de agosto de 2008, 28 de enero de 2010, 31 de julio de 2007, 30 de julio de 2008, 31 de julio de 2009, 29 de julio de 2010, 28 de febrero de 2007, 14 de enero de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010, 14 de enero de 2011, 4 de agosto de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de julio de 2007, 14 de enero de 2008, 30 de julio de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 31 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010 y 14 de enero de 2011.

A su vez a don **JULIÁN MORENO DE PABLO**, lo condenó a la pena única de cinco años de reclusión menor en su grado máximo multa de 20 UTM accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público durante el tiempo de condena, accesoria especial del artículo 61 bis de la ley de Mercado de Valores, esto es, inhabilitación especial de dos años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva sin costas como autor de los delitos reiterados de infracción al artículo 59 a) de la Ley de Mercado de Valores, delito del artículo 60 letra E de la Ley de Mercado de Valores (uso de información privilegiada), artículo 27 letras A y B de la Ley 19.913 (lavado de dinero), infracción al artículo 157 de la ley General de Bancos cometidos el 28 de abril, 11 de agosto, 30 de octubre, de 2006; 28 de febrero, 30 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre, de 2007; 29 de febrero, 30 de abril, 13 de agosto, 29 de octubre, de 2008; 26 de febrero, 29 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre de 2009; 26 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y, 25 de noviembre todos del 2010; 17 de marzo, 29 de abril de 2011; 10 de abril de 2007, 11 de abril de 2008, 13 de abril de 2009, 12 de abril de 2010, 13 de abril de 2011 (primer ilícito); 20 de abril, 21 de abril, 8 de julio y 9 de julio, todos de 2010 (segundo ilícito); 17 de abril, 2 de junio de 2008, 28 de junio de 2011 (tercer ilícito); 28 de febrero de 2007, 31 de enero de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de enero de 2011, 28 de febrero de 2007, 8 de abril de 2008, 4 de agosto de 2008, 28 de enero



**Foja: 1**

2010, 31 de julio de 2007, 30 de julio de 2008, 31 de julio de 2009, 29, e julio de 2010, 28 de febrero de 2007, 14 de enero de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010, 14 de enero de 2011, 4 de agosto de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de julio de 2007, 14 de enero de 2008, 30 de julio de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 31 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010 y 14 de enero de 2011.

Finalmente a **MARÍA ISABEL FARAH SILVA**, fue sentenciada a la pena única de cinco años de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 UTM accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público durante el tiempo de condena, accesoria especial del artículo 61 bis de la ley de Mercado de Valores, esto es, inhabilitación especial de dos años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva sin costas como autora de los delitos reiterados de infracción al artículo 59 a), de la Ley de Mercado de valores, delito del artículo 60 letra E de la Ley de Mercado de valores (uso de información privilegiada), artículo 27 letras A y B de la Ley 19.913 (lavado de dinero), infracción al artículo 157 de la ley General de Bancos cometidos el 28 de abril, 11 de agosto, 30 de octubre, de 2006, 28 de febrero, 30 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre, de 2007, 29 de febrero, 30 de abril, 13 de agosto, 29 de octubre, de 2008, 26 de febrero, 29 de abril, 14 de agosto, 30 de octubre de 2009; 26 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y, 25 de noviembre todos del 2010, 17 de marzo, 29 de abril de 2011, 10 de abril de 2007, 11 de abril de 2008, 13 de abril de 2009, 12 de abril de 2010, 13 de abril de 2011 (primer ilícito); 13 de octubre de 2010, 21 de enero de 2010 y, 22 de enero de 2010 (segundo ilícito); 17 de abril, 2 de junio de 2008, 28 de junio de 2011 (tercer ilícito); 28 de febrero de 2007, 31 de enero de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de enero de 2011, 28 de febrero de 2007, 8 de abril de 2008, 4 de agosto de 2008, 28 de enero de 2010, 31 de julio de 2007, 30 de julio de 2008, 31 de julio de 2009, de julio de 2010, 28 de febrero de 2007, 14 de enero de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010,



Foja: 1

de enero de 2011, 4 de agosto de 2008, 30 de enero de 2009, 28 de enero de 2010, 31 de julio de 2007, 14 de enero de 2008, 30 de julio de 2008, 14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 31 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13 de julio de 2010 y 14 de enero de 2011.

c) Sentencia dictada en causa RIT 14988-2014 de 25 de noviembre de 2014:

En esta decisión del Tribunal con competencia en Lo Penal, se reiteran sustancialmente los hechos referidos en lo precedente.

Para efectos del primer punto de la interlocutoria de prueba, cabe destacar los siguientes hechos:

*“PABLO FUENZALIDA MAY que ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Informática y Logística entre los años 2000 a 2011, cooperó en los procesos de renegociaciones automáticas en el ámbito propio de la gerencia a su cargo y, además, a contar de la última parte del año 2010 fue asumiendo progresivamente una mayor colaboración en dichos procesos, teniendo durante todo ese periodo interés en los resultados de la compañía en su calidad de accionista de la misma.”*

*“En efecto, desde junio del año 2010 FUENZALIDA MAY integró el Comité de Cobranzas que, como se dijo, fue creado por el imputado RAMÍREZ CARDOEN con el objeto de identificar a los créditos renegociados o Energizados y los créditos normales o no renegociados, que integraban la "Cartera de Colores" y que tenían una mayor probabilidad de cobro, encargándose en un comienzo de canalizar los requerimientos de desarrollos informáticos que surgían en éste. En este comité FUENZALIDA MAY conoció el real estado de la cartera de deudores de la empresa, distinto a aquel que era difundido públicamente por la empresa de la forma que ha sido antes detallada.”.*

*“Es decir, dentro del ámbito del Comité de cobranza la labor de FUENZALIDA fue cooperar a identificar los créditos renegociados y no renegociados a efectos de continuar con las políticas de renegociación realizadas por la compañía, como asimismo a realizar procesos de cobros de dinero de forma de generar mayor flujo de caja a la empresa.”.*

*“A partir de diciembre del año 2010 el imputado FUENZALIDA MAY empezó a colaborar al Gerente Corporativo de Productos*



Foja: 1

*Financieros, el imputado MORENO DE PABLO, en el desarrollo de los procesos de cobranza, en particular respecto de la cartera denominada "E" o "energiza", lo anterior conociendo aquella información que respecto de la cartera le era entregada en respectivo Comité de Cobranza desde Junio del 2010.”.*

*“Asimismo, desde enero del año 2011 el imputado FUENZALIDA MAY comenzó a cooperar con JULIAN MORENO en la labor que este realizaba en la Gerencia de Productos Financieros, impartiendo instrucciones tanto respecto de la cobranza como de la mantención de dicha cartera, encargándose de identificar a los clientes que debían ser sujeto de procesos especiales de renegociaciones unilaterales, consistiendo en definitiva su labor, en gestionar, junto a MORENO DE PABLO, la denominada cartera de clientes "energizados”.”.*

*“El imputado FUENZALIDA MAY participó en la sesión de Comité de Directores de fecha 26 de enero del año 2011 en la que la Gerente Corporativa de Administración, la imputada FARAH SILVA, explicó la forma en que se realizaba la determinación de las provisiones y en la que hizo entrega de información falsa tanto respecto de la verdadera morosidad de los clientes como de la condición de renegociación de la cartera energizada, información que era conocida por el imputado FUENZALIDA MAY desde que se involucró en la gestión de dicha cartera conjuntamente con el imputado MORENO DE PABLO. En consecuencia, a través de sus actuaciones, el imputado FUENZALIDA MAY colaboró en posibilitar el falseamiento de la información financiera que era entregada al mercado, lo que implicó la distorsión del nivel de morosidad de la compañía, de la condición de renegociación de la cartera crítica y el abultamiento artificial de los resultados que eran informados al Directorio y consignados en los antecedentes financieros, cooperando así a la entrega de información falsa a la SVS y al mercado...”.*

*“Por último el imputado FUENZALIDA MAY participó en la sesión de directorio del Junio del 2011, donde se informó en detalle al director del monto estimado a la fecha de créditos renegociados de la cartera Normal y cartera especial. Además se informa de la existencia de deudos*



Foja: 1

*renegociados reiteradamente, asimismo sin consentimiento y cuyos créditos no se encontraban provisionados.*

*“En esa sesión JULIAN MORENO solo informó que esta situación se realizaba solo desde el año 2008, FUENZALIDA reconoce en esta sesión que conocía que se renegociaba a los clientes en forma automática desde que se le encargó a fines del 2010 por NICOLAS RAMIREZ la colaboración en la labor de MORENO DE PABLO.”.*

*“QUINTO: Que, en mérito de lo razonado en lo que precede, en cuanto al delito de ENTREGA DE INFORMACIÓN MALICIOSAMENTE FALSA AL MERCADO, analizadas las probanzas aportadas, se satisfacen los presupuestos del artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, ilícito que fuera perpetrado en forma reiterada, que se encuentra en grado de desarrollo consumado y que le ha correspondido al acusado participación en calidad cómplice.”.*

En lo dispositivo se condenó a **PABLO FUENZALIDA MAY**, a la pena de 2 años de reclusión menor en su grado medio, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como cómplice de un delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado y como autor de un delito de uso de información privilegiada, ambos en grado de desarrollo consumados.

**DÉCIMO.-** Que, importante es consignar que tales sentencias condenatorias se encuentran ejecutoriadas, por lo que se pueden hacer valer en este juicio civil, como lo dispone el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte el artículo 180 del mismo Código establece que: *“Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirven de necesario fundamento.”.*

De las normas antes citadas, debe tenerse por cierto e inamovible para esta sentenciadora, que los demandados **PABLO ALCALD**  
**SAAVEDRA, MARÍA ISABEL FARAH SILVA, JULIÁN MORENO**  
**DE PABLO, PABLO FUENZALIDA MAY y NICOLÁS RAMIREZ**  
**CARDOEN**, incurrieron en diversos delitos en el contexto del denominado



Foja: 1

caso La Polar, en el ejercicio de sus respectivas funciones, realizando de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones ilícitas, destinadas a falsear la información financiera de Empresas La Polar S.A.

A lo menos desde el año 2006 hasta el mes junio del año 2011, se perpetraron al interior de dicha compañía una práctica reiterada y sistemática denominada, entre otras formas, “Normalización”, “Renegociación” o “Renegociación por sistema”. En virtud de esta práctica, un número cada vez más significativo de créditos correspondientes a clientes que se encontraban en mora pasaron a integrar la cartera de créditos vigentes de la empresa, esto es, de deudas al día mediante la renegociación que de aquellos realizó unilateralmente la compañía, colocando al día la deuda y otorgando nuevos plazos para su pago, sin previo abono, consentimiento ni conocimiento de los clientes.

La mencionada práctica unilateral incidió en la veracidad de los resultados de Empresas La Polar S.A., en la medida que habiéndose incrementado artificialmente tanto la “Cartera de Créditos por Cobrar” como el monto de los ingresos obtenidos por la sociedad, las utilidades que fueron informadas en los referidos EEFF fueron también mayores que las reales, al no reconocerse ni descontarse el monto real de las provisiones, esto es, el verdadero porcentaje de riesgo de incobrabilidad de la cartera ni sus respectivos castigos.

Los demandados antes referidos tuvieron cabal y pleno conocimiento de tales renegociaciones unilaterales y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de La Polar que se proporcionaba a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general.

En particular el señor **ALCALDE** incurrió en el delito de proporcionar antecedentes falsos a la SVS, a los accionistas de la compañía y al público en general; la demandada señora **FARAH**, cometió idéntico delito; el señor **MORENO** también; el señor **FUENZALIDA** perpetró tal ilícito en calidad de cómplice y el señor **RAMIREZ** fue condenado por misma conducta típica, en calidad de autor; todo ello sin perjuicio de demás delitos que constan en las mencionadas sentencias criminales condenatorias.



Foja: 1

En consecuencia, trae razón la parte demandante al haberles atribuido una actuación culposa o dolosa -en este caso consciente y deliberada-, destinada a tergiversar la realidad financiera de La Polar y la información que la compañía entregaba al mercado y al público en general, infringiendo de este modo el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores; configurándose a cabalidad el primer requisito de la responsabilidad civil extracontractual, en relación al literal a) de la interlocutoria de prueba; todo ello sin perjuicio de las demás contravenciones asentadas en sede criminal.

Las alegaciones de algunos de estos demandados destinadas a negar estos hechos no sólo contravienen el efecto de cosa juzgada, sino que resultan incompatibles con lo resuelto en las sentencias criminales, no siendo lícito para este Tribunal considerar o ponderar pruebas en contrario, las que por lo demás no se vislumbran conforme al mérito del proceso.

En lo concerniente al demandado **SANTIAGO GRAGE**, que fuere gerente corporativo de finanzas de La Polar, no obstante no figurar condenado en las sentencias referidas en el motivo que antecede, entre los hechos que les han servido de necesario fundamento se ha asentado su participación ilícita en los delitos cometidos por los codemandados.

En efecto, se estableció que *“En este contexto, y en el ejercicio de sus respectivas funciones, el imputado NICOLAS RAMIREZ, entre Noviembre del 2009 y Enero del 2011 por su parte, en conjunto con los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO, RAMÍREZ CARDOEN, GRAGE DÍAZ, GONZÁLEZ IAKL, FUENZALIDA MAY, BAHAMONDES ARRIAGADA y TAPIA VIDAL, realizaron de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones mediante las cuales cometieron consciente y voluntariamente los hechos típicos que a continuación se señalan y en las fechas que en cada caso se indican, o bien facilitaron consciente y voluntariamente los medios esenciales para que éstos se cometieran...”*. Asimismo se dejó constancia de su participación en la entrega de información falsa al mercado respecto de la inscripción de la línea de bonos de La Polar de 16 de diciembre de 20

En su caso, concurre además la circunstancia que fue multado por su participación en el caso La Polar, por la Superintendencia de Valores





Foja: 1

Seguros; y reclamaba judicialmente la Resolución N° 355 que lo sancionó, fue desestimada su pretensión por el 17° Juzgado Civil de Santiago y por la I. Corte de Apelaciones de esta ciudad (Rol I. Corte 7937-2014); sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada de acuerdo a lo probado por la demandante en los documentos acompañados a fojas 1.404. Se estableció en tales decisiones que transgredió sus obligaciones o deberes de cuidado o diligencia en relación a su cargo en La Polar y que estuvo en posición de advertir las repactaciones unilaterales.

Así las cosas, se encuentra suficientemente acreditada la existencia del hecho culposo o doloso que **MONEDA** le imputó.

En cuanto a **MARTÍN GONZÁLEZ IAKL** -que tampoco ha sido condenado penalmente-, figura mencionado en la sentencia condenatoria de **NICOLÁS RAMIREZ CARDOEN**, en lo relativo a el delito que cometió este último contemplado en el artículo 157 de la Ley General de Bancos y en la causa RIT 6930-2011, atribuyéndole a **GONZALEZ IAKL**, declaraciones maliciosamente falsas en el prospecto de la sexta colocación de línea de efectos de comercio N°063 de Empresas La Polar S.A. Asimismo y según los documentos acompañados a fojas 1.400, este demandado suscribió las declaraciones de responsabilidad de los estados financieros de La Polar correspondiente al ejercicio 2010 y marzo de 2011.

Se configura en consecuencia o se tiene por establecido que **MARTÍN GONZÁLEZ IAKL** tuvo intervención en el proceso de repactaciones unilaterales y contribuyó a entregar información financiera de Empresas La Polar S.A., que no se ajustaba a la realidad, encontrándose acreditado a su respecto el hecho sustancial, pertinente y controvertido del literal a).

**UNDÉCIMO PRIMERO.-** Que, en cuanto al necesario vínculo de causalidad entre los ilícitos asentados en lo precedente y los perjuicios reclamados, no obstante lo que se dirá más adelante sobre la procedencia y efectividad de estos últimos, en tanto la baja en la cotización bursátil de las acciones de Empresas La Polar S.A., se produce a causa de la publicación del hecho esencial del **9 de junio de 2011** por el cual el gerente general de dicha compañía informa a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre las irregulares prácticas de la administración y éstas últimas constituyen





Foja: 1

fue ocultado a los directores e inversionistas, sin que el actuar, culposo o no de la actora, haya podido alterar o desvirtuar el curso causal de los acontecimientos y la perpetración de tal ilícito.

En sustento de sus alegaciones el señor **ALCALDE** no rindió prueba sobre este tópico, por lo que se prescindirá de análisis a su respecto.

Ahora bien, los daños demandados serán analizados el capítulo III, en conjunto para todos los demandados, ya que se hacen radicar en los mismos hechos y por idénticos montos.

**II.- EN CUANTO A PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, CONSULTORES Y COMPAÑÍA LIMITADA (PWC).**

**DUODÉCIMO.-** Que, consta a fojas 410 y siguientes que se acumuló a esta causa la proveniente de Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, Rol: 22651-2014, seguida por MONEDA, en representación de los fondos comparecientes en autos, en contra de PWC.

Dicha demanda se funda en que PWC habría infringido sus obligaciones en su labor de auditoría externa de La Polar, al no realizar ninguna advertencia o reparo a los estados financieros de la compañía que permitiera sospechar o detectar los ilícitos en que incurrieron sus ejecutivos principales, aquí demandados. En particular, afirma que la información financiera de La Polar fue falseada a lo menos desde el año 2006 por parte de los más altos ejecutivos de La Polar y de su Gerente General, *“información falsa que fue entregada al mercado financiero en general y que PWC no advirtió, teniendo la información, antecedentes e instrumentos necesarios para hacerlo, incumpliendo, durante años, grave y negligentemente las obligaciones que la ley le impone como empresa auditora externa y que, en definitiva, causaron una serie de perjuicios a los inversionistas, dentro de los cuales se encuentran los fondos administrados por mi representada.”*

Sostiene que basó sus decisiones de inversión en La Polar, en información pública, validada y cotejada por PWC.

Como elemento esencial de sus reproches, afirma que la SV respecto de los estados financieros de la Polar al 31 de diciembre del 2006 mediante Resolución Exenta N°063 sancionó a PWC a pagar una multa



Foja: 1

beneficio fiscal, por infringir diversos preceptos de la Ley de Valores; la SBIF, en relación al Informe de Procedimientos Acordados correspondiente al año 2010, que elaboró PWC para Inversiones SCG S.A, filial de La Polar, sanciono a su vez a esta demandada por resolución N°93, decisión que fue ratificada por los Tribunales; y la misma SVS habría sancionados por segunda vez a PWC, por su labor en los estados financieros de La Polar del año 2009, por Resolución N°061.

En relación al periodo anterior al año 2010, desde el año 2007, agrega que **PWC** incurrió en idénticos ilícitos ya que no advirtió, la existencia de repactaciones unilaterales y, a consecuencia de ello, no advirtió el falseamiento de la cartera de créditos de La Polar y su impacto en los estados financieros. Luego hace referencia a determinados indicios o hechos, que constarían en las decisiones administrativas de la SVS.

Que en cuanto a los perjuicios, **MONEDA** expone idénticos antecedentes que aquellos que sustentan su acción en contra de los ex ejecutivos de La Polar, solicitando se indemnice a los fondos, por los mismos montos que requiere de ellos.

Que en lo relativo al vínculo de causalidad que esgrime, refiere que de haber actuado **PWC** con la diligencia que le impone su *lex artis* y la ley, tendría que haber detectado las graves deficiencias y falencias que presentaban los estados financieros de La Polar. Reitera que si esta demandada hubiese enviado alguna señal de alerta, los inversionistas habrían podido tomar las medidas necesarias para el resguardo de sus inversiones o simplemente no hacerlas.

**DÉCIMO TERCERO.-** Que, **PWC** en su defensa sostuvo lo que consta en la parte expositiva, alegando primeramente defectos de forma y fondo de la acción deducida, que atendida dicha naturaleza, se resolverán en lo que sigue:

- a) Refiere que **MONEDA**, no habría acreditado la existencia de los fondos por los que comparece y tampoco la representación invocada.

Esta alegación será rechazada en consideración a que en la escritura pública acompañada por la parte demandante, inobjetada por las partes, hay constancia de la identificación de los fondos administrados por **MONEDA**, sin perjuicio que además: a fojas 1.141 la demandante



Foja: 1

acompañó certificados emitidos por el DCV (Depósito Central de Valores) respecto de la inversión en acciones de La Polar entre el 8 de junio y 30 de noviembre de 2011 de los fondos comparecientes; y la propia demandada solicitó el despacho de un oficio a la SVS reconociendo la existencia de Pionero Fondo de Inversión, Moneda Chile Fund Limitada, Moneda Small Cap. Latinoamérica Fondo de Inversión, Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión y Champion Fondo de Inversión Privado (**fojas 1.380**), admitiendo así su existencia.

- b) Por otra parte, se postula que la parte petitoria seria inepta, ya que **MONEDA** no pediría nada para sí y tampoco para los fondos.

Al respecto, la petición de la demandante si bien no es del todo precisa, deja meridianamente claro, en concordancia con el cuerpo de la demanda, que pide que los fondos sean indemnizados y que ella ha comparecido en su nombre o representación.

- c) Agrega que **MONEDA** no ha solicitado la declaración previa de concurrencia de un ilícito civil respecto de **PWC**.

Sobre esta alegación, la que también será desestimada, es del caso consignar que **MONEDA** ha requerido se acoja su demanda en todas sus partes, lo que incluye la declaración de concurrencia de la responsabilidad civil alegada en todo el libelo y la consecuente condena pecuniaria.

**DÉCIMO CUARTO.-** Que, despejado lo anterior, cabe ahora referirse a si **PWC** incurrió o no en los ilícitos extracontractuales denunciados en la demanda.

Lo primero que cabe señalar es que en la demanda el hecho ilícito que se imputa consiste en que **PWC** no advirtió, debiendo en su concepto hacerlo, la existencia de repactaciones unilaterales y a consecuencia de ello, no detectó el falseamiento de la cartera de créditos de la Polar y su impacto en los estados financieros.

El resto de las imputaciones, se refieren o reiteran las resoluciones administrativas de la SVS y SBIF. Sobre esta materia, debe despejarse desde luego, que la mera sanción administrativa no constituye *per se* un hecho ilícito extracontractual, ni tampoco produce cosa juzgada; debiendo vincularse con los demás requisitos de la responsabilidad civil y con los antecedentes concretos del juicio, conforme a la interlocutoria de prueba



**Foja: 1**

que atribuyó el *onus probandi*, en este aspecto, a la actora. En adición a ello, es pertinente señalar que las sanciones administrativas, producirían todos sus efectos cuando el acto administrativo se encuentre firme.

A la luz de tales consideraciones corresponde analizar la sanción administrativa impuesta por la SBIF a **PWC**, que reclamada ante los tribunales, fue ratificada y se encuentra por tanto a firme, como se acreditó en el proceso.

A fojas 2.563, rola el oficio evacuado por la SBIF, que contiene la Resolución N°93, de 18 de abril de 2012, que como se ha dicho, fue ratificada por los Tribunales Superiores de Justicia. En ella se advierte que su objeto fue una revisión del Informe de Procedimientos Acordados elaborado por la demandada para Inversiones SCG S.A -filial de La Polar- el año 2010. Se estableció en dicha resolución que: “*considerando los hechos expuestos en función a los deberes y obligaciones que se ven afectas las empresas de auditoría externa resulta clara la falta de diligencia de PWC en la elaboración del Informe Circular N° 17 del año 2010.*”.

Concluye que **PWC** infringió el artículo 248 inciso 1° de la Ley N° 18.045, en relación a la Circular N° 17 de 28 de abril de 2006 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la elaboración del Informe Circular N° 17 del año 2010, aplicándole una multa de 4.500 UF. Los hechos o reparos que se establecieron como sustento de la sanción, radican en que la auditora no informó como excepción que la aprobación de los procedimientos de créditos estaba centralizada en las subgerencias, pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros; en que la auditora no identificó excepciones en cuanto a que la función de administración del riesgo de crédito estaba radicada en la subgerencia de riesgo crediticio y en la subgerencia de cobranzas, ambas pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros; en que **PWC** no informó como excepción que las políticas de renegociación carecían de un criterio prudencial de evaluación; en que no reparó en la inexistencia de documentación dentro de la empresa que diere cuenta de los supuestos de metodología de determinación de provisiones; en que la auditora informó excepciones respecto de la cobertura de los trabajos de auditoría interna; y en que no identificó excepciones en cuanto a que la auditora



Foja: 1

interna dependía de contraloría, lo que demuestra su bajo nivel jerárquico y escasa independencia.

De lo razonado precedentemente, es posible establecer como un hecho de la causa que **PWC** obró negligentemente en la elaboración del Informe de Procedimientos Acordados referido a SCG S.A., del año 2010, que dice relación con la tarjeta de crédito no bancaria de dicha casa comercial. Sin embargo, tal sanción no resulta suficiente para determinar si esta demandada pudo advertir la existencia de las repactaciones unilaterales, y consiguientemente alertar sobre el falseamiento de la información financiera de Empresas La Polar S.A., no indicándose en la misma tal circunstancia. La prueba testimonial rendida por la demandante del señor Luis Hernán Palacios Correa quien se limitó a reconocer un informe por él elaborado, no contribuye a este fin. El resto de la prueba documental aportada por **MONEDA**, no se refiere directamente al Informe de Procedimientos Acordados del año 2010 y tampoco a los años 2007, 2008 y 2009.

Es de advertir además que **MONEDA** no ha acreditado en qué medida el Informe de Procedimientos Acordados del año 2010 incidió en sus decisiones de inversión en acciones de La Polar, en qué fechas y concretamente qué adquisiciones fueron motivadas por la dicha labor de auditoría, de modo de vincular la negligencia previamente asentada y los perjuicios que se demandan.

En cuanto a las sanciones adoptadas por la SVS en contra de esta demandada no existe discusión entre las partes sobre el hecho de que éstas han sido reclamadas por **PWC** en las causas seguidas ante el 4º Juzgado Civil de Santiago (Rol 12.140-2012) y 14º Juzgado Civil de esta ciudad (Rol 7464-2014) y que a la fecha no han sido resueltas por sentencia ejecutoriada, y por tanto, tales actos administrativos no pueden estimarse como definitivos en esta sede jurisdiccional. Lo anterior no impide considerar tales sanciones, eminentemente técnicas, en contraste con la abundante prueba rendida por **PWC** a fojas 855 y fojas 1022, en el marco de esta acción de responsabilidad extracontractual.

De su ponderación se advierte que la SVS crítica una serie de procedimientos a la labor de **PWC** en el desarrollo de su trabajo



Foja: 1

auditoría a los estados financieros de la Polar de los años 2009 y 2010; y, por su parte, la demandada intenta desvirtuar tales afirmaciones establecidas por la autoridad competente, reclamadas judicialmente.

No es esta sede la que tiene que determinar quién lleva razón en todos estos aspectos técnicos, sino que el 4 y 14 Juzgados Civiles de Santiago, sin perjuicio que es posible presumir que existen indicios más que suficientes para establecer que si bien la demandada no participó en los ilícitos cometidos por los ex ejecutivos de La Polar, atendida la magnitud de las repactaciones unilaterales y las múltiples infracciones detectadas por los órganos especializados, que **PWC** debió indagar durante los años 2009 y 2010, en cumplimiento de sus deberes legales, más profundamente o con mayor escepticismo profesional las cuentas por cobrar de La Polar y las provisiones efectuadas por la compañía.

Si tal mayor despliegue profesional o diligencia hubiese permitido descubrir los ilícitos cometidos por los aquí codemandados, resulta una incógnita o una mera hipótesis, cuestión que atendida su naturaleza técnica, debió ser objeto de un dictamen pericial o de otra prueba independiente que hubiese permitido a esta sentenciadora llegar a adquirir convicción al respecto; lo que no ocurrió.

Sobre este punto, se tiene en consideración que el trabajo de auditoría se nutre de la información que le entrega la empresa, la que como se ha asentado en lo precedente se encontraba falseada por los ex ejecutivos de La Polar y que conforme a los documentos aportados por **PWC** a fojas 959, consistentes en las cartas de representación emanadas de Empresas La Polar S.A. fechadas el 25 de enero de 2008, 25 de febrero de 2009, 25 de febrero de 2010 y 15 de marzo de 2011, se le aseguró a dicha auditora, el supuesto desconocimiento de situaciones irregulares en que estaría implicada la gerencia y, finalmente, que los contratos que celebró esta demandada con La Polar, también acompañados a fojas 959, se advierte que **PWC** no se obligó siempre o necesariamente a detectar las irregularidades, fraudes y errores que se pudiesen producir al interior de dicha compañía.

De cualquier manera y aun estableciéndose -como se ha asentado- que conforme a las probanzas aportadas al proceso, que **PWC** incurrió infracción a sus deberes legales y a su *lex artis*, en especial al artículo





Foja: 1

de la Ley de Mercado de Valores, no resulta posible vincular causalmente tal falta de diligencia a las decisiones de inversión de la actora y a los perjuicios que se habrían ocasionado.

**DECIMO QUINTO.-** Que en este sentido, valga señalar que **MONEDA** confesó que inició su inversión en La Polar el año 2003 (Respuesta de don Pablo Echeverría a la pregunta singularizada con el N° 2 del pliego de posiciones); que tal decisión de **MONEDA** de invertir en La Polar se fundó en la existencia de un controlador que la había sacado de la quiebra (Respuesta del mismo absolvente N° 18) y que en definitiva, depositó su confianza en el demandado **PABLO ALCALDE** y en su equipo de trabajo, ya que tenían mucha credibilidad en el mercado (Respuesta del mismo absolvente N° 69). Agregó que **MONEDA** y su representante fueron engañados con toda la información falsa que la compañía enviaba a la SVS y el mercado en general. A su vez, **MONEDA** reconoció a través de Pablo Echeverría que mantuvo una reunión privada con el demandado antes indicado, con el objeto de interiorizarse sobre la situación económica y financiera de Empresas La Polar S.A. (Respuesta N° 6); que otros representantes de la actora se reunieron con ejecutivos de La Polar (Respuesta N° 27); y que existió una reunión clave entre representantes de **MONEDA** con los demandados **SANTIAGO GRAGE** y **JULIÁN MORENO** (Respuesta N° 65).

De las respuestas antes indicadas, en relación con lo dispuesto en el **artículo 1.712 del Código Civil**, se concluye que las adquisiciones de acciones de La Polar por parte de **MONEDA** principiaron cuando la empresa no era auditada por **PWC** que inició su labor el año 2007 y no el 2003, teniendo para ello en vista antecedentes comerciales sobre el nuevo controlador de La Polar y posteriormente, en la confianza hacia el señor **ALCALDE** y reuniones habidas con los ejecutivos demandados en autos, que en definitiva son a quienes se les atribuye el engaño y falseamiento de la información que La Polar enviaba a la SVS.

En consecuencia, a la luz de los hechos reconocidos, no es posible establecer la existencia de una relación de causalidad entre la negligencia de **PWC** y los daños que se reclaman en la especie. Cabe agregar que la causa inmediata de la baja en la cotización de las acciones de La Polar, como



Foja: 1

asentó en el considerando DÉCIMO PRIMERO es la revelación del fraude, cometido por los ejecutivos demandados en este juicio y que sí se hubiere descubierto con anterioridad a la comunicación de hecho esencial efectuada por el Directorio de La Polar el día 9 de junio de 2011, como le exige **MONEDA** a **PWC**, el valor de transacción de las acciones de esa compañía, hubieren disminuido igualmente su valor (Respuesta N° 136 de Pablo Echeverría representante de **MONEDA S.A.**), lo que resulta indiciario de la ausencia de relación causal.

### **III.- EN CUANTO A LOS PERJUICIOS:**

**DÉCIMO SEXTO.-** Que, corresponde dilucidar ahora si los fondos administrados por **MONEDA** han sufrido los daños que se demandan y que se les atribuyen a los ex ejecutivos principales de La Polar y a la auditora **PWC**.

El daño como lo ha sostenido el profesor Enrique Barros Bourie es la condición indispensable bajo cualquier régimen de responsabilidad civil que se pretenda hacer valer.

En el caso de autos, tanto en la demanda que dio origen a este juicio en contra de los ejecutivos demandados, como aquella acumulada dirigida en contra de **PWC**, la actora sostiene que los perjuicios consistirían en la diferencia de valorización (que corresponde a la cotización bursátil o precio promedio de las acciones de La Polar) de las posiciones accionarias que tenían los fondos por ella administrados entre el 8 de junio de 2011 y el 30 de noviembre del mismo año, por un total de \$25.343.221.718. Agrega que su inversión inicial al 8 de junio del año antes referido alcanzaba a \$30.607.259.129, quedó reducida al 30 de noviembre de 2011, excluyendo al fondo **Campion**, a la suma ascendente a \$4.797.067.410. Justifica la elección de la segunda fecha de comparación -30 de noviembre de 2011-, en el hecho que el 29 de noviembre del mismo año, se dieron a conocer los nuevos estados financieros de La Polar y solamente a partir del día siguiente de tal data, habría sido factible adoptar decisiones de inversión o de inversión. En lo que atañe al fondo **Campion**, se afirma que vendió el 100% de su posición accionaria, durante los meses de agosto y septiembre 2011, y que por tanto habría sufrido perjuicios por un total



**Foja: 1**

\$387.466.445. A esta última suma arriba restando de la denominada inversión inicial al 8 de junio de 2011 de este fondo, que ascendería a \$466.970.000, el valor de enajenación de todas las acciones de que era titular Campion por un monto de \$79.503.555.

**MONEDA** no califica derechamente los perjuicios que habrían sufrido los fondos. Sin embargo del mérito de la demanda y teniendo en consideración que no se trataría de beneficios que habría dejado de ganar o percibir, solo cabe analizarlos desde la perspectiva del daño emergente, que se conceptualiza como la pérdida o disminución efectiva que sufre la víctima en su patrimonio, en este caso, los patrimonios de los fondos que administra **MONEDA**.

Para acreditar tales perjuicios, la actora acompañó a fojas 1.141 certificados emitidos por el DCV (Depósito Central de Valores) referidos a la inversión de los fondos que administra en acciones de La Polar, para los días 8 de junio, 30 de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre, 2 de septiembre y 30 de noviembre, todos del año 2011 y un certificado emitido por la Bolsa de Comercio con el valor de la cotización bursátil de las acciones de La Polar para las mismas fechas. Del mérito de estos instrumentos es posible determinar que el 8 de junio de 2011 Pionero Fondo de Inversión era titular de 11.247.000 acciones de La Polar y al 30 de noviembre del mismo año detentaba idéntica cantidad de acciones; al 8 de junio de 2011 Moneda Chile Fund Ltd. era titular de 812.000 acciones de La Polar y al 30 de noviembre del mismo año era dueña de idéntica cantidad de acciones; al 8 de junio de 2011 Moneda Renta Variable Chile era titular de 150.000 acciones de La Polar y al 30 de noviembre del mismo año era dueña de idéntica cantidad de acciones; al 8 de junio de 2011 Moneda Small Cap Latinoamérica era titular de 699.876 acciones de La Polar y al 30 de noviembre del mismo año era dueña de idéntica cantidad; y que Campion Fondo de Inversión Privado al 8 de junio de 2011 era dueña de 200.000 acciones de La Polar, al 1 de septiembre del mismo año era titular de 177.337 acciones de La Polar, al 2 de septiembre del mismo año era titular de 140.000 acciones de La Polar y al 30 de noviembre de 2011, ya no contaba en su patrimonio con acciones de tal compañía. A

vez en el certificado emitido por la Bolsa de Comercio de Santiago,



**Foja: 1**

cuenta de los valores de transacción de las acciones de La Polar, dividido entre mayor, menor, medio y de cierre, para los días 8 de junio de 2011, 30 de agosto de 2011, 31 de agosto de 2011, 1 de septiembre de 2011, 2 de septiembre de 2011 y 30 de noviembre de 2011.

Del análisis de estos documentos es posible establecer que resultan insuficientes para acreditar los daños a título de daño emergente que se demandan en autos, ya que no dan cuenta del costo que tuvo para **MONEDA** en representación de los fondos, la adquisición de acciones de La Polar, las fechas en que aquello aconteció o los desembolsos dinerarios reales, efectivos y ciertos de la inversión. El valor bursátil de la acción de La Polar al 8 de junio de 2011, no constituye un parámetro idóneo para probar el costo o inversión inicial de los fondos en La Polar, ya que pueden resultar contrarios a la realidad -como ocurre en la especie- o influenciados por diversos factores de mercado, especulaciones o expectativas lucrativas, que no necesariamente tienen correlación con la realidad patrimonial de los fondos, respecto de los cuales no se ha acompañado antecedente probatorio atinente a sus estados financieros, contabilidad u otro antecedente fehaciente que dé cuenta de su situación financiera real o la pérdida económica efectiva cuya reparación pretenden. A lo anterior es necesario agregar que se encuentra acreditado en el proceso, en la diligencia confesional de **MONEDA**, que esta inició su inversión para los fondos que administra, el año 2003 (respuesta a la articulación N° 2 del pliego de posiciones que absolvió el representante de **MONEDA** don Pablo Echeverría), siendo presumible que el valor de tales adquisiciones iniciales, no lo fueron por el valor de transacción de mercado de las acciones de La Polar al 8 de junio de 2011. Igual defecto se advierte con la fecha escogida como mecanismo de comparación para cuantificar los perjuicios -el 30 de noviembre de 2011-, data esta última en que tampoco se habría producido una transacción efectiva y cierta de acciones de La Polar por parte de los fondos. En cuanto a la elección de esta última fecha propiamente tal, si bien puede resultar razonable haber esperado hasta tal data para decidir u camino de inversión o des-inversión, lo concreto es que no se encuentra acreditado en este proceso cuál fue en definitiva la decisión adoptada y consecuencias, sin perjuicio que la imposibilidad alegada por **MONEDA**



**Foja: 1**

encuentra contradicha por las decisiones que adoptó respecto del fondo *Campion*, el cual habría enajenado la totalidad de su paquete accionario con anterioridad al 30 de noviembre de 2011.

El informe pericial evacuado en autos por el perito señor Fidel Eugenio Quinteros Fuentes no contribuye a esclarecer la existencia de perjuicios ciertos, reales y efectivos para los fondos comparecientes, en tanto sus conclusiones se asienten sobre las premisas o métodos de cálculo que postula **MONEDA** en su demanda; y por consiguiente, adolecen de idénticos defectos a los referidos en lo que precede. Es así como el perito para determinar la existencia de perjuicios refiere que *“la metodología a utilizar consistirá en comparar el valor bursátil de la acción de La Polar al 8 de junio de 2011 y el 30 de noviembre de 2011”*, que es exactamente el mismo cálculo que emplea la actora, sin que el señor perito explique porque opta por dicha metodología, siendo discutible la necesidad de tal dictamen, si en definitiva se limita a comparar y restar el valor de transacción de las acciones de La Polar entre dos fechas determinadas; operación aritmética que se encuentra dentro del haber cultural o conocimientos asentados de los Jueces de la República, y que como se viene señalando, no deviene en un perjuicio efectivo para los fondos. Posteriormente el señor Quinteros agrega que *“ha considerado la ventana de tiempo ya referida porque esas fechas son las relevantes para determinar la existencia de posibles perjuicios para los accionistas de LA POLAR S.A.”*, mera aserción o sentencia que no aparece debidamente fundada por el experto. Siguiendo la línea propuesta por el perito, vuelve a afirmar que *“el 30 de noviembre de 2011 es el día a partir del cual, tras conocerse los nuevos Estados Financieros consolidados de La Polar, auditados por ERNST & YOUNG, el mercado volvió a disponer de información confiable acerca de la realidad patrimonial y financiera de la compañía”*; sin explicar cuál es la razón de tal elección, en términos técnicos o contables, que es la especialidad que detenta el señor perito. Asimismo, se encuentra acreditado que el perito no revisó los libros contables y estados financieros de los fondos administrados por la demandante, lo que a juicio de la sentenciadora, era información según la lógica a todas luces necesaria por



**Foja: 1**

acreditar la existencia de perjuicios en dichos fondos, más aun teniendo a la vista la especialidad del profesional, esto es, contador auditor.

Así las cosas, y en lo referente a los perjuicios demandados por la actora, y específicamente a lo consignado por el perito, cabe tener presente que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que "Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica". Dicha norma no le fija un valor probatorio tasado a la prueba pericial, como acontece con otras probanzas, sino que consagra la potestad del tribunal de apreciarla en conformidad a las reglas de la sana crítica ya que, por medio de la referida disposición se conduce el análisis del sentenciador conforme a las reglas del correcto entendimiento contingentes y variables, con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, que son estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia. Es la ley la que encomienda al juez la forma como apreciará la prueba pudiendo, por ende, dar o no dar valor probatorio a estos medios, razonando conforme a las reglas de la lógica y máximas de experiencia, motivo por el cual queda dentro de lo que se denomina prueba judicial y no legal. Las reglas de la sana crítica no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente, y las segundas variables en el tiempo y en el espacio, las que constituyen reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse una sentencia. Es por ello que las máximas de experiencia son normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en muchos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie. Como categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, la sana crítica configura una fórmula adecuada de regular la actividad del juez frente a la prueba cuyos elementos son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y la fundamentación de decisiones.



Foja: 1

De esta forma, el peritaje en comento no exterioriza de manera clara los argumentos o al menos el procedimiento técnico que le permita arribar a las conclusiones consignadas en el mismo informe, Por lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 425 del Código de Enjuiciamiento Civil, las consideraciones del referido peritaje serán desestimadas.

En cuanto al fondo *Campion*, que es el único que habría realmente enajenado acciones de *La Polar* entre el 30 de agosto y 2 de septiembre del año 2011, el perito refiere que dicha transacción le habría ocasionado una pérdida de \$387.736.445. Para sustentar su afirmación, el señor perito presenta un detalle de las cantidades de acciones, su precio de venta y los valores percibidos por el fondo de inversión *Campion* en la venta o liquidación de las acciones que tenía en *La Polar*. Sin embargo, el perito no indica la fuente de tales conclusiones, no encontrándose agregado al proceso ningún antecedente documentario que refrende las fechas de enajenación de tales acciones, el costo y el valor percibido por *Campion* (facturas, estados financieros u otros), razón suficiente para descartar las apreciaciones del señor *Quinteros* sobre esta materia. Asimismo, en este aspecto se efectúa igualmente la comparación para determinar la pérdida, con el valor bursátil de las acciones de *La Polar* al 8 de junio de 2011, proceder que ya se ha asentado como improcedente, en razón de su falta de correspondencia con el costo real de adquisición de acciones por parte de *Campion*, elemento básico este último respecto del cual la actora no ha rendido prueba en el proceso, que hubiese permitido comparar tal costo inicial con el precio de enajenación de las acciones. Respecto del valor de transacción bursátil de las acciones de *La Polar* al 8 de junio de 2011, es necesario tener en consideración que aquél se encontraba artificialmente elevado o inflado a causa del fraude perpetrado al interior de dicha compañía, circunstancia que ha sido reconocida por la actora, en la respuesta de su representante don *Pablo Echeverría* a la articulación 57 de la absolución de posiciones; hecho que impide otorgar certeza, certidumbre e inclusive legitimidad al daño que se reclama conforme al método de cálculo que sustenta el libelo pretensor.

Esta sentenciadora no comparte la apreciación del perito en orden a no considerar las utilidades y dividendos de los fondos administrados por



Foja: 1

demandante a causa de su inversión en acciones de La Polar -no se advierten razones valederas para así proceder-; sin embargo, no encontrándose acreditada la efectividad de los perjuicios que se demandan, improcedente resulta avocarse a determinar las ganancias percibidas por los fondos administrados por **MONEDA**, como ha pretendido la defensa de don **PABLO ALCALDE**, según consta en el acta de reconocimiento presentada por el perito.

Conforme al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que "*Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica*". Es la ley la que encomienda al juez la forma como apreciará la prueba pudiendo por ende, dar o no dar valor probatorio a estos medios, razonando conforme a las reglas de la lógica y máximas de experiencia, motivo por el cual queda dentro de lo que se denomina prueba judicial y no legal. Así las cosas y conforme a lo expuesto, las consideraciones del referido peritaje serán desestimadas.

En nada altera lo concluido en lo precedente, el instrumento acompañado a fojas 831 por la actora, consistente en un "*INFORME ECONÓMICO*" elaborado por don Hernán Palacios Correa, en cuanto razona bajo los mismos supuestos que el informe pericial, antes desestimado.

En consecuencia, siendo de carga de la demandante acreditar los perjuicios y no existiendo en el proceso antecedentes probatorios aptos para determinar con certeza el impacto patrimonial efectivo para los fondos que administra **MONEDA**, no cabe más que concluir que no existió el daño reclamado conforme a los términos de la acción deducida, siendo aquel improcedente, irreal y en suma, inefectivo.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** Que, la demás prueba documental aportada por las partes y la testimonial rendida por **PWC**, que en general se limitó a reconocer instrumentos elaborados por los deponentes, sin declarar sobre los hechos pertinentes y controvertidos, no tienen la entidad o pertinencia suficiente para alterar lo que se decidirá en lo dispositivo.

**DÉCIMO OCTAVO.-** Que, teniendo en consideración lo expuesto en lo precedente, en especial los considerandos **DECIMO CUARTO**, **DECIMO QUINTO** y **DECIMO SEXTO**, unido a los requisitos de





Foja: 1

responsabilidad extracontractual, se desestimaré la acción deducida en contra de los ex ejecutivos de Empresas La Polar S.A., como también aquella interpuesta en contra de PWC, sin costas, por estimarse que la actora tuvo motivo suficiente y plausible para litigar.

**DECIMO NOVENO.-** Que los demás antecedentes probatorios allegados al proceso, esto es, la testimonial, la documental acompañada por ambas partes, el informe pericial y en particular, la absolución de posiciones, no alteran las conclusiones a que ha llegado el tribunal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1437, 1546, 1556, 1698, 1700, 1702, 1712, 1713, 2314 y siguientes, y 2332 del Código Civil; 144, 160, 170, 178, 180, 254, 342, 346, 348, 399, 425, 426, 428, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 248 de la Ley 18.045, Ley sobre Sociedades Anónimas; Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas; Circular N° 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Ley General de Bancos se resuelve:

a) Que se rechazan las excepciones dilatorias opuestas por **PABLO ALCALDE SAAVEDRA** (fojas 270 y 314) y aquella impetrada por **JULIAN MORENO DE PABLO** (fojas 259).

b) Que se rechazan las excepciones de cosa juzgada y prescripción opuestas por el demandado **PABLO FUENZALIDA MAY**.

c) Que se rechaza la demanda deducida en contra de **PABLO ALCALDE SAAVEDRA, JULIAN MORENO DE PABLO, MARÍA ISABEL FARAH SILVA, NICOLÁS RAMIREZ CARDOEN, PABLO JORGE FUENZALIDA MAY, MARTÍN GONZÁLEZ IAKL y SANTIAGO GRAGE DÍAZ**.

d) Que se rechaza la demanda deducida en contra de **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, CONSULTORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**.

e) Que cada parte soportará sus costas.

Regístrese. Archívense los autos, en su oportunidad.



Dictada por doña **PATRICIA CASTRO PARDO, JUEZ TITULAR.** Autorizó don **GIORGIO ZUNINO COFRÉ, SECRETARIO SUBROGANTE.** Anotada en el Libro en causas en estado de fallo N° 11746.- CONFORME.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de Diciembre de dos mil diecisiete**

